

Se declara texto oficial y auténtico el de las disposiciones oficiales, cualquiera que sea su origen, publicadas en la *Gaceta de Manila*, por tanto serán obligatorias en su cumplimiento
(Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861).



Serán suscritores forzosos á la *Gaceta* todos los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente pagando su importe los que puedan, y supliendo por los demás los fondos de las respectivas provincias.

(Reales órdenes de 26 de Setiembre de 1861.)

GACETA DE MANILA.

GOBIERNO GENERAL DE FILIPINAS.

Administración Civil.

MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 515.—Excmo. Sr.—

En el expediente instruido acerca de la interpretación que ha de darse á la Real orden de 20 de Agosto de 1888 por la que se concedió á D. Felipe Canga Argüelles, el poder efectuar una colonización en la Isla de la Paragua; el Consejo de Filipinas ha emitido con fecha 12 de Marzo último el siguiente dictamen: Excmo. Sr.—Con Real orden de 18 del mes próximo pasado tuvo á bien V. E. remitir á consulta de este Consejo el expediente formado por el Ministerio de su digno cargo con motivo de la instancia presentada por el Capitán de Fragata retirado, D. Felipe Canga Argüelles, en 30 de Marzo de 1888, para que se le concediese una parte de la Isla de la Paragua, para establecer una explotación agrícola-minero forestal, que atendida con el mayor interés por el Gobierno de S. M. dió origen á la Real orden de 20 de Agosto del mismo año, por la que se le asignó, con dicho objeto todo el terreno solicitado, que ventajosamente situado al Centro de la Isla que divide en dos partes de costa á costa y que está casi en contacto con su Capital. Como quiera que esta concesión es un hecho y que antes de hacerla fué consultado este Consejo, carecería ahora de oportunidad cualquiera consideración que se hiciera sobre el asunto, y hay que limitarse á las instancias del Sr. Canga Argüelles, de fecha posterior que acompañan al expediente y á un notable suceso que también consta en el mismo. La primera es de 15 de Enero de este año, y está suscrita por D. Ramon Aranáz, como apoderado del concesionario, que manifiesta que, cuando se iba á formalizar un contrato con una poderosa compañía y se había trasladado á Filipinas, su poderdante, á fin de tomar posesión del terreno concedido y á dar principio al desmonte y roturación, cumpliendo lo que establece el art. 4.º de la concesión, se ha encontrado sorprendido con la interpretación, que en lo referente á explotación forestal, se dá por la Autoridad Superior del Archipiélago, suponiendo que no alcanza más que al aprovechamiento de las maderas que necesite la Colonia y exigiendo que las demás que se obtengan de la explotación, habrán de ser pagadas por el concesionario al precio de tarifa establecido para cualquiera isla del Archipiélago á los que la solicitan, si ha de poder disponer de ellas. Que el sentido jurídico y vulgar de la palabra explotación, es el aprovechamiento de una cosa en lo principal y en lo accesorio; y que siendo esta la empleada para expresar el alcance de la concesión, es evidente que dá el derecho al usufructo completo de las maderas que haya en los terrenos concedidos; que no se extiende á mayores consideraciones, pero que basta fijarse en las frases «explotación agrícola», «explotación minera» y «explotación forestal» para comprender la justicia de la reclamación y por que si se privase del libre derecho de disponer de la madera, dejaría de existir la concesión de la repetida «explotación forestal». Concluye suplicando que se aclare, de Real orden el alcance de la concesión, en virtud de la cual pueda el concesionario hacer libremente de la madera que encuentre en dicho terreno, el uso que le convenga, sin pagar nada por ella. El mismo D. Ramon Aranáz por sí y como apoderado de los demás interesados en la referida concesión hecha á D. Felipe Canga Argüelles, promovió otra solicitud en 20 del indicado mes de Enero último manifestando que para la explotación agrícola, minero forestal que vá á realizarse se ha tropezado con la dificultad de no haber Aduana habilitada en Puerto Princesa, Capital de la Paragua, y que tanto para la importación de los efectos necesar-

rios, como para la exportación de los productos de la Colonia, hay que ir á despachar á 300 millas de distancia, constituyendo un obstáculo inmenso para el planteamiento y desarrollo de la colonización, por la imposibilidad de encontrar buques que se avengan á hacer una navegación peligrosa para buscar la Aduana que ha de autorizar las operaciones consiguientes; á cuyo obstáculo hay que agregar el que presentan las compañías de seguros, no queriendo asegurar, en tales condiciones, ni los buques, ni los cargamentos; que por estas razones se impone la necesidad de habilitar una Aduana en Puerto Princesa cosa en extremo fácil y poco costosa pues que con solo autorizar al Administrador y al Interventor de Hacienda de dicha Capital, para que ejerzan sus funciones como tales empleados en la Aduana que se establezca en el referido punto, quedaría resuelta la cuestión y además convendría que estos funcionarios estuviesen también facultados para despachar los buques en el puerto de Ullugan, en la parte Occidental de la Isla, siendo de cuenta del concesionario los gastos que se ocasionen. Terminando con la petición de que se habilite una Aduana en Puerto Princesa, con facultad de despachar también en el de Ullugan, bien sea para el uso general de los habitantes ó para el exclusivo de la colonización de que se trata, con las condiciones que convenga imponer. Por otra Real orden de 24 del mes de Febrero próximo pasado se remite igualmente á este Consejo, una nueva instancia del mismo D. Ramon Aranáz, en concepto de apoderado del mencionado D. Felipe Canga Argüelles, para que se tenga presente al emitir el informe pedido en la del día 18 que se deja referida. En este documento se aducen razones atendibles para tratar de demostrar que la concesión obtenida tiene precisamente que encerrar la facultad de aprovechar totalmente en el terreno concedido, sin que pueda comprenderle lo establecido en la Ley de Colonias agrícolas de 4 de Setiembre de 1884, por que para nada se menciona ni en el informe de este Consejo de 14 de Diciembre de 1885 referente á la colonización de la Paragua, ni el del Consejo de Ultramar de 20 de Junio de 1888, tan favorable á la petición del Sr. Canga Argüelles de terrenos en aquellas Islas; ni en la Real orden en que se le concedieron como si fuesen una cosa distinta las colonizaciones de que trata la enunciada Ley de la que se autorizaba en la Paragua. A esta creencia dan ciertamente lugar los términos de la concesión que dice textualmente que «á solicitud de D. Felipe Canga Argüelles y Vi-lalba, se le asignan para una explotación agrícola, minero forestal, salvo mejor derecho adquirido por otros los terrenos etc.», con las franquicias que á continuación se determinan, por 20 años, á contar desde el día en que se dé principio á los trabajos de roturación que deben efectuarse antes de que trascurren dos años de la Soberana disposición que los concede. El Sr. Aranáz, considera como una gracia la concesión hecha al Sr. Canga Argüelles y manifiesta que si no ha de convertirse ilusoria, es de justicia y de equidad que se permita la libre disposición de las maderas y demás productos forestales aunque sea con las precauciones que se crean necesarias para evitar abusos. Al efecto, hace presente que el concesionario está dispuesto á aceptar las restricciones que se le impongan para impedir que á la sombra de la concesión, se trate el bosque, y que hay un medio de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que ha contraído, que consiste en que no se le permita disponer de más maderas, que aquellas que se encuentran en el terreno que vaya roturando y poniendo en cultivo. Concluye la instancia suplicando que se permitan al Sr. Canga Argüelles, utilizar libremente las maderas y demás pro-

ductos forestales que se encuentren en los terrenos que se le han concedido en la Isla de la Paragua, sin más restricción que la de que no pueda hacer cortas sino en los terrenos que vaya al mismo tiempo roturando y cultivando. Como complemento de estas tres solicitudes obra en el expediente una minuta del telégrama dirigido por el Ministerio de Ultramar al Gobernador General de Filipinas, que dice. «Conforme en que concesionario Paragua solo puede aplicar maderas á necesidades Colonia y nunca al tráfico. Dígame V. E. si existe algun otro inconveniente para dar posesión á Canga Argüelles Colonia Paragua». Se encuentran así mismo en el expediente unos documentos que llaman poderosamente la atención por las tendencias que revelan y que sin importancia real del momento, no estará demás tener en cuenta. Se trata de que el Súdito Americano Cliatt pretende, en virtud de la concesión publicada en la «Gaceta» de 29 de Setiembre de 1888, y mediante traspaso del concesionario, Sr. Canga Argüelles, ejercer el derecho de Soberanía en la Paragua, según participó por el cable el Ministro de España en Washington, al Sr. Ministro de Estado, en 3 de Enero de este año, consecuente á una comunicación que recibió el Cónsul de España en San Francisco de California. El referido Ministro de España en los Estados Unidos, al corroborar el telégrama citado, traslada íntegra la comunicación mencionada del Cónsul Español expresado, con el fin de que llegando á conocimiento del Sr. Ministro de Ultramar, prevenga lo conveniente al Gobernador General de Filipinas, por si se presentase en aquellas islas algun individuo sin la competente autorización alegando derechos que á su juicio, no están consignados en la concesión hecha al Sr. Canga Argüelles, en la que no aparece la cláusula de derecho de traspaso. El celoso Cónsul de referencia, participa en la comunicación expresada, que un Sr. P. E. Van Bushirh, Oficial de la Marina de los Estados Unidos, fué á verlo para decirle que había recibido una carta del Sr. V. V. B. Clayatt, escrita en Port-Saind, en 22 de Octubre último, refiriéndole que, había formado un Sindicato de Capitalistas, para colonizar una parte de Isla de la Paragua, utilizando la concesión de unas cuatrocientas millas cuadradas, obtenidas del Gobierno Español en 20 de Agosto de 1888 y publicada en la «Gaceta oficial» en 29 de Setiembre siguiente, hecha á favor del Sr. Canga Argüelles. El Sr. Van Bushirh, deseaba saber si el Cónsul tenía dicho número de la «Gaceta de Madrid» y si sabía algo de la concesión de que se trata: á lo que este tuvo que contestar negativamente. Entonces, dicho sujeto, le dejó copia de la carta citada para que tomara informe; sobre el particular; y su contenido le pareció tan extraño y de tanta importancia que creyó de su deber poner en conocimiento de su superior, lo más esencial de la misma. Dice la carta que segun la concesión tiene obligación de trabajar solamente las tierras que comprende, que tienen privilegios sin número, incluyendo el de enarbolar bandera, en buques construidos en la zona cedida y de gobernar los colonos, segun sus propias leyes; que tienen el derecho de libre exportación é importación que perderán á los 20 años, que tendrán que pagar un impuesto sobre la tierra, que mientras tanto, y para siempre gobernarán como Soberano independiente; y todos los colonos blancos y oficiales ejecutivos estarán armados, y serán para todos los fines y casos, una colonia independiente, hasta el punto que los Gobiernos extranjeros tendrán que reconocer su bandera. Dice también, que sobre sus tierras hay de 300 á 500 indígenas inofensivos, que serán sus súbditos y que su primer cuidado será atraerlos á su autoridad con la mira de obtener tri-

buto de ellos. El Sr. Clyatt anima al Sr. Van, Bushirh a realizar todo lo que posea y a trasladarse a la Paragua con cuanto pueda llevar en efectivo y le insta para que lleve tambien una buena lancha de vapor, de 30 toneladas con un cañon, para que sirva de guarda costas. Seguidamente le aconseja que vea al Cónsul español y si es necesario, al Ministro de España en Washington, para consultar con ellos, pero cuidando de no promover dificultades entre los Gobiernos de España y de los Estados Unidos y que comunique a D. Ramon Aranáz, Cónsul de Grecia en Madrid todas las cuestiones oficiales Españolas que embaracen la realizacion de sus consejos é instrucciones. Se extiende despues, sobre la importancia y las ventajas de tener una estacion naval extra-territorial en caso de guerra con una potencia Europea ó Asiática y las que pudieran resultar para los Estados Unidos. Comentando esta carta, agrega el expresado Cónsul que le ha parecido extraño que España hubiese cedido su Soberanía sobre una parte de su territorio á unos extranjeros y más aun siendo de los Estados Unidos, que tienen la creencia de que los tratados entre ellos y las naciones de raza Española, obligan solamente á éstas pero no á aquellos que no ha podido creerlo: que supone que, de existir la concesion se equivoca el Sr. Clyatt en su alcance, por no entender bien el idioma y que acaso tenga ultteriores miras que sean opuestas al espíritu de la concesion. En su consecuencia, solicita instrucciones para poder contestar al Sr. Van Bushirh, de quien tiene la idea de que es una digna persona, á la que sería lástima dejar invertir cuanto tiene en una empresa, quizás descabellada y peligrosa. Segun comunicacion de la Subsecretaria del Ministerio de Estado de 16 de Enero último, se ha remitido al Ministro de S. M. en Washington, una copia de la concesion otorgada al Sr. Canga Argüelles que fué trascrita á dicho Centro por el Ministro de Ultramar en 4 del mismo mes. El contenido de la carta del Sr. Clyatt, se presta á serias consideraciones que parece indispensable consignar, para precaver sucesos que pueden ser trascendentales. A primera vista parece indudable que la carta del Sr. Clyatt, debe tener algun fundamento porque parte de la concesion hecha al Sr. Canga Argüelles, que cita con toda exactitud y que es un hecho indiscutible; y debe llamarse la atencion sobre la circunstancia de que el representante en esta Corte, del Sr. Canga Argüelles, D. Ramon Aranáz, Cónsul de Grecia en Madrid sea la persona indicada en la carta del Sr. Clyatt, para que se entienda con ella el Sr. Van Bushirh á fin de zanjar las dificultades que se ofrezcan, por parte del Gobierno Español para la realizacion de sus consejos é instrucciones; y tambien que el mismo Sr. Aranáz, presente la solicitud ya citada; de 20 de Enero de este año, en su nombre y como apoderado de los demás interesados en la concesion hecha á D. Felipe Canga Argüelles, que por lo visto le ha dado alguna participacion en este negocio. No parece muy aventurado suponer que careciendo el Sr. Canga Argüelles, del Capital necesario para adquirir ó reunir los elementos indispensables para explotar el terreno que se le asignó en la Paragua por Real orden de 20 de Agosto de 1888, haya tratado de obtenerlo por medio de algunos asociados que le facilitasen los recursos de que probablemente carecería; y como en España no suele abundar el dinero para ciertas especulaciones, no sería extraño que casualmente haya tropezado con algun extranjero que estimulado por la importancia de la empresa se haya decidido á tomar parte en ella y que revistiéndola de un carácter un tanto fantástico haya tratado de interesar en la misma á algunos amigos. La circunstancia de proceder la carta de que se ha dado cuenta de Port Said, parece indicar que su autor estaba camino de Filipinas y quien sabe si formando parte del séquito del Sr. Canga Argüelles pues no cabe dudar que el Sr. Clyatt estaba perfectamente enterado del asunto y de las relaciones del concesionario con el Sr. Aranáz. Si se interroga á este sujeto es de esperar que pudiese dar muchos detalles sobre las gestiones hechas por el Sr. Canga Argüelles para procurarse fondos que le habrán ciertamente costado mucho trabajo conseguir y tambien que pudiese dar la explicacion de la carta que nos ocupa. Pero no considerando ni el espíritu ni la letra de la Real orden de 20 de Agosto de 1888, que se puedan hacer trasposos de la concesion ni operaciones de crédito, que puedan conducir á convertirla en un estado independiente, dentro de una Isla Española, no parece necesaria otra cosa sino dar cabal conocimiento de este incidente al Gobernador general de Filipinas sino se hubiese ya hecho, dándole á la vez las convenientes instrucciones para que por ningun concepto se permita en un punto de tanta gravedad la menor trasgresion. Para el efecto convendría prevenir al Gobernador de la Paragua, que sin poner la menor dificultad en las operaciones naturales de la explotacion, en los terrenos concedidos al Sr. Canga Argüelles, haga vigilar el cumplimiento de nuestras leyes, en ellos, con todo rigor no permitiendo que

se verifique ningun acto que tienda á desentenderse de ellas, ni permitiendo que navegue ninguna embarcacion de cualquiera clase que sea, perteneciente ó afectá á la Colonia, sin estar debidamente inscrita, ni que arbole otra bandera que la nacional, ni que lleve á bordo ningun armamento como no obtenga antes el competente permiso de las Autoridades Superiores del Archipiélago, que tampoco en tierra se pueda usar en manera alguna otro distintivo nacional que nuestro pabellon, que se haga saber al concesionario, que por concepto alguno ha de perder la concesion hecha, su carácter de genuinamente Española, por más que pueda llegar á interesarse en ella algun extranjero; que la representacion por ausencia, enfermedad etc. del Sr. Canga Argüelles, ha de recaer inescusablemente, en un Súbito Español que cualquiera que sea el resultado de la empresa, jamás se permitirá la exigencia de potencia alguna extraña, en los asuntos relacionados con la Colonia, que por lo tanto, cuantos tomen parte en ella, han de atenerse exclusivamente á las leyes Españolas y á lo que determinen las autoridades tambien españolas y que por último, se le retirará al Sr. Canga Argüelles la concesion, cualquiera que sea el estado de la explotacion, si por hacer contratos indebidos escudándose del límite que determina la Real orden tantas veces citada, de 20 de Agosto de 1888, diese lugar á alguna reclamacion ó complicacion de carácter internacional. En cuanto al aprovechamiento de la madera, conviene examinar hasta que punto es atendible la peticion del concesionario, fijándose en lo especial, de la concesion y en las dificultades que se han de presentar para una explotacion en tan gran escala. La Ley de Colonias agrícolas para las Islas Filipinas, de 4 de Setiembre de 1884, establece las reglas para el desarrollo y la formacion de las mismas, concediendo importantes franquicias y ventajas, pero no supone que llegase á intentarse una explotacion en doce mil ó catorce mil hectáreas de terreno que es lo que mide la concesion hecha al Sr. Canga Argüelles, por que señala como superficie mínima la de doscientas hectáreas la que han de tener dichas Colonias, dando á entender que es ya una extension considerable. Esta ley que tiene su origen en la promulgada para la Península, en 3 de Junio de 1868, de la que está copiada con solo algunas variantes, no ha podido satisfacer á las necesidades del Archipiélago Filipino, en general y mucho menos á las de la Isla Paragua, en particular, por las circunstancias tan distintas que concurren en ambas regiones y por la verdadera imposibilidad de asimilar á la una lo legislado para la otra en materia que presenta diferencias tan esenciales. ¿Que hay de comun entre la Paragua y cualquiera de las provincias de España? Ciertamente que nada, como no sea la nacionalidad políticamente considerada. A estas diferencias, debe sin duda atribuirse que la ley referida de 4 de Setiembre de 1884 no haya tenido efectiva aplicacion en la Paragua y que se haya tratado de adelantar su colonizacion por disposiciones especiales. El Real Decreto de 19 de Enero de 1886, basado en el informe de este Consejo de 14 de Diciembre de 1885 establecida las reglas para llegar á la colonizacion referida, separándose esencialmente de la citada ley y el más reciente Decreto del Gobierno General de Filipinas de 14 de Abril de 1887, concede nuevas ventajas á los que se trasladen como colonos á la Isla en cuestion de que está muy distante la misma ley. La Real orden de 20 de Agosto de 1888 tantas veces citada, hace mencion de las razones que ha tenido el Gobierno para otorgar el mayor número posible de facilidades y exenciones al Sr. Canga Argüelles para la explotacion del terreno que le concede en la Paragua, y todo hace creer que no son aplicables á esta concesion las prescripciones restrictivas de la ley de 4 de Setiembre de 1884. La Direccion de Administracion y Fomento del Ministerio de Ultramar, entiende que las condiciones especiales de la concesion hecha al Sr. Canga Argüelles, no excluyen que este se rija por las leyes generales, para todo aquello que no se haya establecido una excepcion en su favor, que se le ha concedido el terreno que pretende explotar, sin exigirle el previo depósito del valor de las maderas, porque habría ascendido á una suma importante, pero que tiene que sujetarse á lo que dispone el art. 12 de la ley que consigna que. «En todo caso las maderas no podrán aplicarse más que á las necesidades de la Colonia y nunca al tráfico». Mucho siente este Consejo no estar conforme con la expresada Direccion porque tiene el conocimiento de que la parte citada de la ley, no es en lo fundamental, aplicable á los terrenos asignados al Sr. Canga Argüelles. El depósito previo del valor de las maderas es irrealizable, porque falta la posibilidad de determinarlo. No es la Paragua, lo que son los montes de la Península, fáciles de recorrer en todos sentidos, y fáciles de apreciar en su riqueza. Sus selvas realmente vírgenes, son de todo punto impenetrables, como no sea abriendo el camino con el machete y no creo

que haya nadie que tenga tan felices disposiciones que pueda contar el número de árboles aprovechables que hay en ellas, ni mucho menos su especie, ni aunque fuera posible saber el número y clase de los árboles que están próximos á la corteza seria en manera alguna, con los del interior, pues no hay que olvidar, que se trata de superficie tan considerable como los mayores mines municipales de España. Pero suponiendo que elevándose á la altura necesaria, por ejemplo, un globo aereostático se haya podido verificar un tenido reconocimiento y apreciar el valor de los árboles al poco más ó menos. ¿Se puede saber nadie, cuantos de dichos árboles llegarán á ser utilizados? ¿No se sabe que en los grandes desmontes hechos al interior, casi la totalidad de los árboles que se abalen tienen que ser quemados para que no torben, por la absoluta imposibilidad de conducirlos los puntos donde pudieran ser embarcados, por falta de caminos y de medios de arrastre? ¿No se sabe todo árbol grande que se corta lejos de la costa ó los rios, es árbol condenado al fuego ó á la dricion? Pues si esto es así; ¿Como puede pretenderse que ningun fundador de Colonia agrícola posite el valor del arbolado existente en el terreno que intente explotar? ¿Cabe á caso en lo posible se tratase de una pequeña superficie de terreno, pudieran practicarse reconocimientos para apreciar aproximadamente el valor de los árboles que existan en él, aunque siempre sería imposible determinar la cantidad de ellos que llegarían á utilizarse; pero la concesion del Sr. Canga Argüelles, puede considerarse como superior á las fuerzas humanas, sea por la jante apreciacion. Y no se diga que para la explotacion de las maderas se lleven sierras de mano y de vapor y que fraccionadas hasta reducir las dimensiones manejables, no habrá árbol que no utilice, por que en muchas ocasiones no podrá llegar la sierra de vapor al lugar de la corta, ni los árboles cortados á la sierra de vapor; y parece oportuno indicar lo caro y lo difícil, ya que no es imposible de ejecutar á mano, tan penosa operacion. De todos modos las maderas aserradas en los buques de los países tropicales resultan tan deterioradas al llegar á los mercados, que difícilmente llegan alcanzar el valor de lo que han costado al explotador, por que generalmente presentan grandes fendas que las inutilizan. Cuando se trata de montes elevados los árboles cortados y despejados de todo ramaje, se trasladan á las llanuras precipitándose por el viento abajo; pero tratándose de llanuras y de terrenos blandos, como son los de los bosques, la operacion de trasportar un árbol, ofrece dificultades, que frecuentemente no se pueden superar; y no hay que olvidar que si el árbol ha de tener valor en los mercados, tiene que presentarse entero. ¿Cuántos hermosos árboles se han tenido que abandonar en los desmontes, por no haber modo de moverlos! No debe por lo tanto esperarse que el Sr. Canga Argüelles, llegue á enriquecerse con las utilidades que obtengan de maderas que corte en la Paragua; pero aunque enriquezca, no debiera ser obstáculo para que se permitiese su libre explotacion por que bien merece ser rico, quien tanto arriesga en busca de la fortuna y quien vá, probablemente á abrir nuevos horizontes al porvenir del Archipiélago Filipino. ¿Que valen para España, los bosques del interior de la Paragua? ¿Que bienes nos producen? ¿Que ventajas sacamos de ellos? Si en su lugar se hacen plantaciones de caña, de azúcar, ó de café, ó de abacá, ¿no se transformaría dicha Isla hasta el punto de producir verdaderas riquezas, como las de Iloilo, la de Panay y la de Negros? ¿No merece una decidida proteccion la persona que lo intenta? Lo que debemos lamentar es que haya muchos espíritus empuñados, como el Sr. Canga Argüelles, porque entonces, otro sería el estado de una gran parte de nuestras Colonias. Cuanto más facilidades dé el Gobierno para la explotacion, más seguros y más fecundos serán sus resultados, como la riqueza que se busca está en el suelo y en el vuelo, no debe vacilarse en sacrificar este en absoluto, pues de alguna parte ha de obtener el concesionario los recursos indispensables para llevar adelante la explotacion y para satisfacer los intereses del Capital que habrá tenido que tomar á préstamo. Las grandes plantaciones de nuestras posesiones ultramarinas, que se han hecho de otro modo que talándolo todo y criticando el producto de la tala, aplicándole el fuego y es positivo que si se hubiese exigido á nuestros colonos la obligacion de depositar el valor del arbolado, no hubieran llegado jamás al grado de prosperidad que alcanzaron. Si se quieren tener colonias ricas y productivas, no hay más remedio que proceder como hemos procedido anteriormente; es decir dejando al explotador libertad de accion, en cuanto no se oponga á la jurisdiccion oficial, y el completo aprovechamiento de cuanto encuentre en el terreno que se le adjudique, de lo contrario, no será posible llegar á los resultados que se desean. Pero hay una razon más para que se conceda al Sr. Canga Argüelles, la libre disposicion de las maderas que produce

hacer llegar á la costa; y es, que se le han negado todo auxilio pecuniario y se le han negado también las ventajas más apreciable que las disposiciones vigentes conceden á los individuos que se trasladan, como colonos, á la Paragua; como son, la alimentación por un plazo bastante considerable y los medios para dedicarse al cultivo de la tierra, y si todo se le niega. ¿Como ha de poder realizar esa colosal empresa? ¿Como no ha de fracasar en ella si no se le coloca en situacion de salir adelante? Interesado como está más que nadie el Gobierno en que el Sr. Canga Argüelles, obtenga el más cumplido éxito; no será lógico negarle la ventaja que solicita sin atender á si puede conseguir mayor ó menor provecho de ella pues lo que sería de desear, es que la realice muy considerable para que sirva de estímulo á otros y para que estimulado el mismo, no tenga motivo para desmayar y trabaje con ardor hasta llegar al término que se propone. Justo es que se tomen las mayores garantías para evitar todo abuso, respecto á la extracción de las maderas ante la posibilidad de que se atienda por el Concesionario preferentemente á explotarlas y que abandone el poner en cultivo las tierras roturadas, pero á esta observacion responde el interesado que se compromete á no hacer corta alguna árboles; si no en los parages que se obliga á cultivar inmediatamente y de este modo es evidente que se hace imposible que se llegue á incurrir en el expresado abuso. Consecuente á todo lo expuesto, entiendo este consejo, que es de atender la peticion del Sr. Canga Argüelles, respecto al aprovechamiento libre de las maderas que resulten de la explotacion agrícola, número forestal, que está autorizado para verificar en terrenos de la Isla de la Paragua, por considerarla justa y sobre todo, conveniente; y por lo tanto, que proceda otorgárselo con la ineludible condicion de que no ha de efectuar corta alguna de árboles, si no ha de poner inmediatamente en cultivo el paraje en que se encuentren y que de no hacerlo exactamente así tendrá que satisfacer forzosamente el valor de los árboles cortados en los sitios que pueden sin cultivar. También se le podría imponer la condicion de no llevar las maderas á los mercados Filipinos por lo que pudieran resultar perjudicados los especuladores en este ramo que satisfagan el valor de sus maderas á la Administracion, por más que á estos no se les exija, como al Sr. Canga Argüelles, la obligacion de cultivar el terreno en que se hayan cortado, y que por lo tanto resulten en gran parte anuladas las ventajas que este pudiera tener sobre aquellos. De este modo será consecuente el Gobierno con sus patrióticos propósitos de favorecer la colonizacion y habrá lugar á esperar que adquiera un alto grado de prosperidad la Isla en cuestion que hasta ahora, vejeta en la inercia y en la pobreza teniendo tantos elementos de riqueza en su seno. Tratándose de la concesion hecha al Sr. Canga Argüelles, parece oportuno recordar que, comprendiéndose en ella el Puerto de Rinusalien, se ha faltado á la ley sexta título séptimo de las de Indias, que determina que los puertos se reserven siempre para el Estado y por esta razon seria conveniente que se hiciese la aclaracion de que dicho puerto y cualquiera otro que hubiese en las costas comprendidas en dicha concesion, no pueden ser propiedad del concesionario sino del Gobierno y también que la propiedad de las expresadas costas se ha de entender con las limitaciones establecidas en la Ley de aguas de 13 de Junio de 1879. Verificándolo así se evitarán probablemente algunas dificultades para lo sucesivo. Respecto á la habilitacion de una Aduana en Puerto Princesa, parece tan razonable la peticion, que este consejo no vacila en inclinar el ánimo de V. E. á que la conceda, por que de lo contrario, serán de gran trascendencia las remoras, las dificultades y los entorpecimientos que tendrán que sufrir todas las operaciones de carga y descarga por tener que ir á despacharse los buques á la Aduana más próxima, obligándoles á efectuar viajes largos y frecuentemente penosos y teniendo que abonarlos con este motivo altos fletes que causarian sensibles pérdidas á los interesados. Como la referida habilitacion se presenta tan fácil con los mismos empleados existentes en Puerto Princesa, no debe esperarse que ofrezca una seria dificultad el ordenarlo y en este supuesto, habrá también que disponer que los buques puedan ser admitidos y despachados en el puerto de Ullugan, lo mismo que en el de Puerto Princesa, segun solicita el apoderado del Sr. Canga Argüelles, á lo cual se presta fácilmente su respectiva situacion, por más que se encuentren el primero, en la Costa Occidental, y el segundo en la Oriental de la Isla. Si no se accediese en este punto á lo solicitado, los buques que tuvieran que descargar en la Costa del Oeste, se verian también obligados á hacer un viaje de peligrosa remotada rodeando lo menos la mitad de la Isla para obtener en Puerto Princesa el permiso para descargar y para ser despachados para dirigirse á su destino. Y si por otra parte se fija la atencion en las franquicias que se tienen otorgadas á la Colonia para la

importacion de efectos y para la exportacion de productos, se obtendrá la persuasion de que las funciones de la Aduana que se habilite, no pueden ser mas sencillas ni de menos responsabilidades. El Consejo, que ha procurado hacer el análisis de los puntos consultados, con la mayor detencion, se considera ya en el caso de condensar su parecer en las conclusiones siguientes: Primera. Debe prevenirse al Sr. Canga Argüelles que no está autorizado para efectuar ni total ni parcialmente el traspaso de la concesion que tiene hecha para explotar una parte de la Isla de la Paragua, sin obtener antes autorizacion del Gobierno, que será dueño de negarla ó de concederla; que la representacion de la empresa explotadora ha de recaer siempre indispensablemente, en un súbdito Español; que en la Colonia no habrá más leyes ni más jurisdiccion ni más autoridad, ni más procedimientos que los de España, que en ninguna parte del territorio que se le tiene asignado, podrá arbolarse con pretexto alguno otro pabellon que el Español, lo mismo que en las embarcaciones que pertenezcan á la explotacion, que deberán estar inscritas con sujecion á lo determinado; y que la menor trasgresion á estas prevenciones, ó la menor reclamacion de caracter internacional que se presente, por su inobservancia, dará lugar á que se le retire en absoluto la concesion cualquiera que sea el estado de los trabajos que tenga hechos. También se le deberá advertir que en concepto alguno puede considerarse como dueño de los puertos ó fondeaderos comprendidos en las costas que limitan con el mar, el terreno concedido, porque solo pueden ser del Estado, segun la Ley y que respecto á la posesion de las mismas costas y de los rios de sus orillas se estará en un todo á lo que se consigna en la ley de aguas de 13 de Junio de 1879. El Gobernador de la Paragua, prestará toda su atencion á que se cumplan las expresadas prevenciones que para su cumplimiento reciba del Gobernador General del Archipiélago, al que tendrá el deber de participar cualquiera irregularidad que observe en la marcha de la Colonia. Segunda: Se autorizará al concesionario para el libre aprovechamiento de las maderas que se encuentren en los terrenos que vaya demostrando, con la ineludible obligacion de poner á estos en cultivo y en caso de no verificarlo así con la de abonar el valor de los árboles cortados que se hayan vendido ó explotado. También quedará obligado á no expedir madera alguna, procedente de la explotacion á ningun punto de las Islas Filipinas, como no sea de tránsito para el extranjero, á no obtener una autorizacion especial para cada caso, del Gobierno General. Tercera: Se habilitará una Aduana en Puerto Princesa, para recibir y despachar los buques que tengan que hacer operaciones de carga y descarga en él ó en el de Ullugan, relacionados con la explotacion para que ha sido autorizado el Sr. Canga Argüelles, á no juzgar el Gobierno conveniente dar mayor extension á sus funciones. Los gastos que ocasione la traslacion al puerto de Ullugan de los empleados de la Aduana, para la visita y el despacho de los buques, serán de cuenta del concesionario. Y pasado posteriormente el asunto á la Seccion de Hacienda y Ultramar del Consejo de Estado, ha emitido dicha Seccion con fecha 9 del corriente el siguiente dictamen Excmo. Sr.—Con Real orden de 12 de Abril comunicada por el Ministerio del digno cargo de V. E. se remitió á informe de la Seccion el expediente sobre colonizacion de la Paragua. El Capitan de Fragata retirado D. Felipe Canga Argüelles en 30 de Marzo de 1888, solicitó se le concediese una parte de dicha Isla para explotacion agrícola, minera y forestal y por Real orden de 20 de Agosto del mismo año, se le asignaron para dicho fin terrenos en el Centro de la Isla, casi en contacto con su Capital D. Ramon Aranaz apoderado del concesionario manifestó en 15 de Enero de 1890 que trasladado ya este á la Colonia, supo con extrañeza que la concesion se interpretaba por la autoridad superior del Archipiélago como simple autorizacion para el aprovechamiento de maderas para la Colonia; exigiéndosele el abono al precio de tarifa, en las demás Islas de las demás que se obtengan. La palabra «explotacion» indica segun Aranaz, el aprovechamiento de una cosa en lo principal y en lo accesorio y por tanto el usufructo de toda la madera que haya en los terrenos concedidos. En 20 del mismo mes de Enero manifestó Aranaz que no había Aduana habilitada en Puerto Princesa, Capital de la Isla, teniendo que despacharse los productos de importacion y exportacion á 300 millas de distancia, lo que es un gran inconveniente para el planteamiento de la Colonia por no encontrarse buques para tan peligrosa navegacion, en condiciones que hacen imposibles los seguros de las naves y de los cargamentos. Esto podría evitarse autorizando al Administrador y al Interventor de Hacienda de la Capital para que ejerzan como empleados de la Aduana que se establezca en Puerto Princesa faltándoles también para despachar los buques en Ullugan, al occidente de la isla de la Paragua, siendo de cuenta del concesionario los gastos que se

ocasionen. D. Ramon Aranaz pidió en otra instancia que se declarase á la Colonia la facultad de desarrollar la explotacion sin comprenderla en la Ley de Colonias agrícolas de 4 de Setiembre de 1884 por que para nada se menciona esta en la concesion. En esta se dice á solicitud de D. Felipe Canga Argüelles y Villalba se le asignan para una explotacion agrícola minero forestal salvo mejor derecho adquirido por otros, los terrenos de que se trata, por 20 años desde que principien los trabajos de roturacion que deberán efectuarse en el periodo de dos años desde la Real orden en que dichos terrenos se conceden. El concesionario aceptará las restricciones que se le impongan para evitar abusos en los aprovechamientos de toda especie y propone que no se le permita disponer de más maderas que las de terreno que se vaya roturando y poniendo en cultivo. El Súbdito Norte americano Mr. Clyatt pretende en virtud de concesion publicada en la «Gaceta» de 29 de Setiembre de 1888 y mediante el traspaso del concesionario Canga Argüelles ejercer el derecho de soberania en la Paragua, segun participó el Ministro de España en Washington al de Estado. En la concesion no aparece semejante cláusula autorizando el traspaso de los derechos otorgados al concesionario. El Cónsul Español en San Francisco de California participó al Ministro Español en Washington y este al de Estado que Mr. Van Bushinh, oficial de la Marina de los Estados Unidos habia recibido una carta de Mr. Clyatt anunciándole que habia formado un sindicato de capitalistas para colonizar parte de la Paragua utilizando la concesion de cuatrocientos millas cuadradas cedidas por el Gobierno Español á Canga Argüelles. Segun dicha carta de Mr. Clyatt tienen los concesionarios el derecho de enarbolar bande a en la parte cedida y de regir á los colonos y el de libre importacion y exportacion y sobre todo los de Soberania independiente, tanto que los Gobiernos extranjeros tendrán que reconocer la bandera de la Colonia. El Consejo de Filipinas, examinando esta parte de los antecedentes dijo que debería darse cuenta de la citada carta al Gobernador General de Filipinas para que no consienta que se interprete maliciosamente la concesion, añadiendo que este asunto podría en adelante dar lugar á graves complicaciones. Sospecha el Consejo de Filipinas que Canga Argüelles no teniendo capital bastante para la colonizacion de la Paragua habrá querido interesar á los extranjeros, quienes por malicia ó por no entender nuestro idioma extienden indebidamente los límites de la concesion. El mismo Consejo de Filipinas dijo que la ley de Colonias agrícolas para las Islas Filipinas de 4 de Setiembre de 1884 establece reglas para su formacion y desarrollo pero sin suponer que se intenten explotaciones en diez ó doce mil hectáreas, dando á entender que es una extension considerable. Esta ley copiada de la Península 3 de Junio de 1868 no satisface las necesidades del Archipiélago Filipino y en particular las de la Paragua. Por eso el decreto de 14 de Abril de 1887, del Gobernador General concede á los Colonos nuevas ventajas no expresadas en la ley. Todo hace creer segun el Consejo de Filipinas que no son aplicables á esta concesion las restricciones de la ley de 4 de Setiembre de 1884. La Direccion general de Administracion y Fomento en el Ministerio del digno cargo de V. E. entiende que las especiales condiciones de la concesion de Canga Argüelles, no excluyen que se rija por las disposiciones generales en todo lo que no sea excepcion introducida en su favor que se le han concedido los terrenos que pedía sin exigirle el previo depósito del valor de las maderas, que habría ascendido á una suma importante; pero que debe sujetarse á lo que dispone el art. 12 de la ley que consigna que en todo caso las maderas no podrán aplicarse más que á las necesidades de la Colonia y nunca al tráfico. No es de la misma opinion el Consejo de Filipinas. El depósito previo del valor de las maderas es irrealizable porque los montes de Paragua no son como los de la Península, fáciles de reconocer ni de valuar las selvas son impenetrables sin el machete ni pueden cortarse y clasificarse los árboles de la costa y mucho menos los del interior. Nadie puede saber cuantos de esos árboles van á ser utilizados. Todo árbol grande cortado lejos de la costa no puede exportarse y por consiguiente se quema ó se pudre. Muchas veces la sierra de vapor no podrá llevarse hasta el arbolado. Además las maderas de los paices tropicales suelen llegar muy deteriorada é inservibles á los puertos de embarque. Nada valen á España los bosques del interior de la Paragua, es difícil que los colonos se enriquezcan; pero aunque se enriqueciesen, nada perdería al país. En cambio si allí cultivan los colonos el tabaco, el azucar, ó el abacá, se verán allí riquezas como las de Iloilo, Panay é Isla de Negros. Debe dejarse, como siempre se ha hecho libertad de accion al colono en cuanto no se oponga á la jurisdiccion oficial; de lo contrario, jamás se llegará á los resultados que se desean. Tanto más debe esto hacerse con la colonia de la Paragua cuanto que se le han negado subvencion y

alimentacion á los colonos por un plazo considerable. Es preciso estimular á Canga Argüelles para que no desmaye en su empresa y estimular á otros que quieran imitarle. Le podría obligar á Canga Argüelles á que no beneficie más maderas que las de los terrenos que cultive y á que no las lleve á los mercados filipinos para no perjudicar á los especuladores y contribuyentes por este ramo. Comprendiéndose en la concesion hecha el puerto de Rinunsalian, se ha faltado á las leyes de Indias que reserven siempre los puertos al Estado y por tanto convendría declarar que dicho puerto y cualquier otro que estuviese dentro de los límites de la concesion serán siempre del dominio del Estado. El Consejo de Filipinas entendió respecto á la habilitacion de una Aduana en Puerto Princesa que era justa esta pretension, pues sino se hace lo que Canga Argüelles pide serán incalculables las dificultades para las operaciones de carga y descarga. Tambien habrá que declarar admisibles los buques tanto en Ullugan como en Puerto Princesa como en la Costa Occidental de Paragua. Las funciones de esta Aduana no pueden ser más sencillas ni de menos responsabilidades. El Negociado correspondiente en ese Ministerio opinó, que debía resolverse la cuestion como proponía el Consejo de Filipinas, remitiendo al Gobernador General copia de los antecedentes y dando conocimiento de lo que se resuelva sobre la cuestion de Soberania al Ministerio de Estado, que se permita á Canga Argüelles de acuerdo con el funcionario que el Gobernador General designe de marcar las 200 hectáreas que ha de poner en cultivo y en ellas únicamente se le permita cortar maderas. De las que se exporten deberá tomar nota la Aduana correspondiente exigiendo al concesionario el valor de las maderas sino cultiva el referido número de hectáreas. Hecho esto podrá hacerse la demarcacion de otras doscientas hectáreas, bajo las mismas condiciones y así sucesivamente. Si el cultivo se abandonase, no tendrá derecho Canga Argüelles á que se efectúen nuevas demarcaciones. Respecto á la habilitacion de la Aduana aunque el Negociado no la cree de absoluta necesidad, procedería consultar á la Direccion de Hacienda del Ministerio de Ultramar para que ponga resolucion. Concluye manifestando que debe encargarse al Gobernador General de Filipinas que ejerza la más activa vigilancia para que Canga Argüelles no extienda indebidamente los límites de la concesion. La Direccion de Administracion y Fomento, se conformó con este parecer. El expediente que V. E. se ha servido remitir á la Seccion es importante, no solo por lo que se refiere á la concesion otorgada á Canga Argüelles, sino tambien por la influencia que su resolucion en una ú otra forma está llamada á ejercer en la colonizacion del Archipiélago. Despues de tres siglos de dominacion española en el mismo hay muchas islas que todavía no se han colonizado ni aprovechado como debían haberlo sido por falta de emigrantes y aun hoy falta la poblacion que ha de hacer productivos los terrenos. Pocos son los que imitan la conducta del antiguo marino D. Felipe Canga Argüelles, trasladándose á las Islas Filipinas con ánimo de colonizar alguna de las más abandonadas; de aquí, entre otras consecuencias la dificultad que encuentra el Gobierno de la Metrópoli para hacer cumplir la legislacion sobre ventas de terrenos y colonizacion de los mismos. Para desviar á los emigrantes de los países á que se dirijen con más frecuencia, con perjuicio de los intereses de la nacion y muchas veces de los suyos propios, es indispensable favorecer todo lo que sea posible á los que emigran á Cuba y á Filipinas. No debe admitirse un criterio sobradamente restrictivo para las concesiones, ni en cuanto á la extension de terrenos cedidos donde hay tantos incultos, ni respecta á las demás franquicias y aprovechamientos que se autoricen, pues si en los primeros ensayos se multiplican las restricciones, jamás se hará la colonizacion de nuestras posesiones. Nuestra antigua Legislacion de Indias no consentía semejantes restricciones, aunque si las imponía á los Colonos siempre que intentasen desconocer los derechos de los indígenas ó faltasen á los deberes que respecto á ellos tenían que cumplir los europeos. Y solo así pudo conseguirse que gran parte de la poblacion indígena no pareciese y que países de vastísima extension se viesen colonizados. Cuando los Gobiernos no conceden subvencion de ninguna clase á los concesionarios de colonias, no pueden ni deben exagerar el espíritu de desconfianza con el que jamás se han desarrollado grandes empresas. En lo que no es lícito cejar lo más mínimo es en conservar intacto el derecho de soberania y en procurar que de tal modo se aprovechen los recursos de las tierras nuevamente colonizadas, que no se esquilmen y hagan inútiles para la vida de las sucesivas generaciones. Con estos principios entrará la Seccion en el examen de las pretensiones de Canga Argüelles. Es la Isla de la Paragua una de las más olvidadas y menos atendidas del Archipiélago y la idea de colonizar la concebida y empujada á realizar por Canga Argüelles merece elogios, entendiéndolo así ese Ministerio le otorgó la concesion, cuyos límites y verdadera inteligencia trata de fijarse á hora. En la obra del viajero francés Marché publicada hace pocos años sobre Luzon y Paragua que el llama Palaonan y en el oprisculo sobre las razas indígenas de Filipinas del alemán Blumentrit se enumeran las varias razas salvajes que ocupan casi todo el territorio de la Isla. Los hispanos filipinos ocupan solamente el extremo N. E.; los cristianos nuevos y los infieles casi toda la superficie y los moros la extremidad meridional hacia Balabac, de donde resulta que al extenderse los colonos, tendrían que luchar con moros y con malayos tagbancias. La poblacion que podría ser de un millon de habitantes se calcula en 26.000 almas. Si se imponen demasiadas restricciones á los colonos que ya tienen las indicadas contrariedades, abandonarían la empresa y no será fácil que en mucho tiempo quiera nadie proseguirla. Si se adopta una política demasiado suspicaz, los colonos á quienes no se dá subvencion de ninguna clase, se retraerán de buscar los recursos absolutamente indispensable para formar su establecimiento. Debe tenerse en cuenta que las colonias agrícolas de Filipinas no pueden sujetarse á las mismas formalidades que las de la Península, no habiendo entre uno y otro territorio, como dice muy bien el Consejo de Ultramar, otra semejanza que la de estar sujetos ambos al dominio de España. Los colonos no se establecerán en Filipinas sino se les aseguran ciertas franquicias en el aprovechamiento de los terrenos, tampoco hallarán indemnizacion de sus rudos trabajos, por consiguiente, sino han de desanimarse en ellos es preciso que se interpreten con amplio criterio las concesiones otorgadas. La riqueza forestal en tanto lo es en cuanto pueden utilizarse los árboles y sus productos, sino se exportan porque no hay caminos, los árboles perecerán en el mismo terreno en que brotaron, sin que hayan tenido ni un momento siquiera valor en cambio. Esto es lo que ocurre no solo en Islas casi abandonadas como la Paragua, sino en otras como la de Luzon que se hallan pobladas. La Seccion no insistirá en las dificultades que á la explotacion forestal se oponen en Filipinas, por que el Consejo de Ultramar las ha expuesto y ponderado suficientemente con gran conocimiento de terreno y copia de datos y únicamente se recuerdan estos en el presente informe para indicar á V. E. que no conviene en manera alguna limitar demasiado los términos de la concesion, exponiendo á dejar improductiva esa misma riqueza forestal de cuyo aprovechamiento se trata. Los terrenos objeto de la concesion son los comprendidos en un cuadrilátero cuyo perímetro está formado por una recta que une Punta aspera con la costa occidental, con la costa norte, del puerto de Binunsalian, al sur de Puerto Princesa; por otra recta determinada por el paralelo de nueve grados treinta minutos, y por las costas Este y Oeste comprendidas entre las dos primeras líneas. Las franquicias consisten en la exencion de todo impuesto sobre la propiedad, cultivo y apuros, lo mismo que sobre las industrias, los derechos de importacion de herramientas y los de exportacion de productos que se derivan de las explotaciones. Otras franquicias se refieren al abanderamiento de un vapor afecto á las mismas industrias, á la exencion de cédula personal del servicio militar á los hijos de los colonos y licencia gratuita de armas. El concesionario no podía oponerse á que atravesando la zona de sus explotaciones, se establezcan en la Isla las comunicaciones necesarias para el servicio público, sin que para este efecto haya de procederse á la expropiacion. Se comprometerá á presentar á los dos años de haber comenzado la roturacion de los terrenos, 200 hectáreas en cultivo; al terminar el quinto, mil hectáreas y al décimo tres mil y el resto al espirar el plazo de los 20 años. Perderá el derecho á la parte de terreno que no estuviese en explotacion si al terminar cualquiera de los mencionados plazos de dos, cinco diez y veinte años no hubiese cumplido dichas obligaciones. Satisfechos todos sus compromisos á los 20 años el concesionario entrará de lleno en la legitima propiedad de los terrenos que se le adjudican. La Real orden de 20 de Agosto de 1888 precisa el objeto de la concesion, diciendo que se otorga para una explotacion agrícola minero forestal, salvo mejor derecho adquirido por otros. Esta última fórmula está conforme con toda nuestra legislacion de indias que prohíbe disponer de su propiedad á los naturales y así es que la concesion se ha hecho en terrenos del Estado. Y en cuanto á lo que se entiende por explotacion debemos referirnos al Diccionario de la lengua, segun el cual, el verbo explotar significa en una acepcion extraer de las minas la riqueza que contienen, y segun otra más general, sacar utilidad de un negocio en provecho propio. «Como se ve en la concesion no existen las restricciones que ahora se trata de imponer á Canga Argüelles y la índole de la riqueza forestal en aquellas regiones no conciente que se le impongan otras que las que ha indicado el Consejo de Filipinas. El mismo concesionario dice que está pronto á limitar esa explotacion forestal por Regiones, no comprendiendo en cada periodo más que la corta de maderas en las hectáreas que reduzca á cultivo, y esta

es en sentir de la Seccion, la única que se le puede imponer, sin obligar precisamente al depósito de una cantidad que sería injusto exigirle, no estando prevista en la concesion y no pudiendo calcularse la riqueza que representa la corta de las maderas ni el aprovechamiento de las mismas. Cuando más se puede obligar á Canga Argüelles á que no lleve las maderas cortadas á los mercados filipinos para no perjudicar á los especuladores en este género de tráfico, que satisfacen contribucion por este concepto al Tesoro público. Aunque ya se comprende que el puerto de Binunsalian no puede estar comprendido en la concesion por que los puertos son del dominio nacional y del aprovechamiento comun, convendría aclararlo así, en el caso de que V. E. crea oportuno aclarar los términos y el alcance de la concesion otorgada. Respecto al establecimiento de una aduana en Puerto Princesa, la Seccion se limitará á decir que segun los antecedentes reunidos, parece que el establecimiento sería útil á los colonos y al Estado, pero no se extiende más en este asunto porque consta en el expediente que se haya tratado este punto en la Direccion general de Hacienda de ese Ministerio. Las comunicaciones del Ministro Español en Washington y del Cónsul en San Francisco de California acerca del pretendido traspaso de los derechos de Canga Argüelles á una compañía extranjera, autorizan á creer que se haya tratado de una verdadera cuestion internacional, ni que se refiera al derecho de soberania. Es un axioma de derecho que los particulares con sus pactos no puedan variar, en más mínimo, el público, ni el Gobierno está autorizado para ceder sin contar con la representacion nacional ni de una manera gratuita, ni por conveniencias onerosas la porcion más insignificante del territorio nacional, ni Canga Argüelles y los colonos pueden crearse facultades para semejante traspaso. La Seccion no encuentra verdaderos motivos de alarma ni temores en las expresadas comunicaciones, ni menos para sospechar que Canga Argüelles tenga intervencion en el asunto sin embargo, para no omitir precauciones podrian tenerse en cuenta las que indica en su informe el Consejo de Filipinas y la que comprende á todas; esto es que el Gobernador General de Filipinas vigile el exacto cumplimiento de las condiciones de la concesion, dando inmediatamente cuenta al Gobierno de cualquiera infraccion de las mismas que se descubra. En resumen, la Seccion es de parecer. 1.º Que en virtud de la concesion Canga Argüelles y los colonos pueden aprovechar libremente las maderas que se encuentren en los terrenos que se vayan roturando y si el aprovechamiento no hace en estos términos, están en la obligacion de abonar el valor de los árboles cortados. 2.º Que la poca podrá exportarlos á ningún punto de las Filipinas como no sea de tránsito para el extranjero, á no obtener una autorizacion especial cada caso del Gobierno General del Archipiélago. 3.º Si pareciese conveniente á V. E. explicar una disposicion especial el alcance de la concesion convendría declarar que no están comprendidos en ella los puertos como de dominio público y que Canga Argüelles no puede traspasar dicha concesion sin previa autorizacion del Gobierno. 4.º Respecto á la creacion de la Aduana, la Seccion entiende que procede oír antes de resolver este punto el parecer de la Direccion general de Hacienda de ese Ministerio, pues en este punto no obran en el expediente los antecedentes necesarios. 5.º Si V. E. se conforma con este dictamen y resuelve el expediente en los términos que propone la Seccion, deberá darse traslado de la resolucion de S. M. al Sr. Ministro de Estado recomendándole que por todos los medios de que dispone en países extranjeros haga públicos los términos de la concesion otorgada á D. Felipe Canga Argüelles para que no pueda este ni otra persona atribuirse facultades ni derechos que el Gobierno no le ha concedido, ni podría conceder sin autorizacion legislativa, con arreglo á la constitucion del Estado. En su vista: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino se han servido resolver con esta fecha lo siguiente. Primeramente que el Sr. Canga Argüelles no está autorizado para efectuar ni total ni parcialmente el traspaso de la concesion que tiene hecha para explotar una parte de la Isla de la Paragua, sin obtener antes autorizacion del Gobierno, que será dueño de negarla ó de concederla; que la representacion de la empresa explotadora ha de recaer siempre indispensablemente en un sujeto Español; que en la Colonia no habrá más leyes, jurisdiccion, ni más autoridad, ni más procedimientos que los de España; que en ninguna parte del territorio que se le tiene asignado, podrá arbolarse por pretexto alguno otro pabellon que el Español, el mismo que en las embarcaciones que pertenecen á la explotacion, que deberán estar inscritas con su cion á lo determinado, y que la menor trasgresion á estas prevenciones, ó la menor reclamacion de carácter internacional que se presente por su inobservancia, dará lugar á que se le retire en absoluto en la concesion, cualquiera que sea el estado de los

es en sentir de la Seccion, la única que se le puede imponer, sin obligar precisamente al depósito de una cantidad que sería injusto exigirle, no estando prevista en la concesion y no pudiendo calcularse la riqueza que representa la corta de las maderas ni el aprovechamiento de las mismas. Cuando más se puede obligar á Canga Argüelles á que no lleve las maderas cortadas á los mercados filipinos para no perjudicar á los especuladores en este género de tráfico, que satisfacen contribucion por este concepto al Tesoro público. Aunque ya se comprende que el puerto de Binunsalian no puede estar comprendido en la concesion por que los puertos son del dominio nacional y del aprovechamiento comun, convendría aclararlo así, en el caso de que V. E. crea oportuno aclarar los términos y el alcance de la concesion otorgada. Respecto al establecimiento de una aduana en Puerto Princesa, la Seccion se limitará á decir que segun los antecedentes reunidos, parece que el establecimiento sería útil á los colonos y al Estado, pero no se extiende más en este asunto porque consta en el expediente que se haya tratado este punto en la Direccion general de Hacienda de ese Ministerio. Las comunicaciones del Ministro Español en Washington y del Cónsul en San Francisco de California acerca del pretendido traspaso de los derechos de Canga Argüelles á una compañía extranjera, autorizan á creer que se haya tratado de una verdadera cuestion internacional, ni que se refiera al derecho de soberania. Es un axioma de derecho que los particulares con sus pactos no puedan variar, en más mínimo, el público, ni el Gobierno está autorizado para ceder sin contar con la representacion nacional ni de una manera gratuita, ni por conveniencias onerosas la porcion más insignificante del territorio nacional, ni Canga Argüelles y los colonos pueden crearse facultades para semejante traspaso. La Seccion no encuentra verdaderos motivos de alarma ni temores en las expresadas comunicaciones, ni menos para sospechar que Canga Argüelles tenga intervencion en el asunto sin embargo, para no omitir precauciones podrian tenerse en cuenta las que indica en su informe el Consejo de Filipinas y la que comprende á todas; esto es que el Gobernador General de Filipinas vigile el exacto cumplimiento de las condiciones de la concesion, dando inmediatamente cuenta al Gobierno de cualquiera infraccion de las mismas que se descubra. En resumen, la Seccion es de parecer. 1.º Que en virtud de la concesion Canga Argüelles y los colonos pueden aprovechar libremente las maderas que se encuentren en los terrenos que se vayan roturando y si el aprovechamiento no hace en estos términos, están en la obligacion de abonar el valor de los árboles cortados. 2.º Que la poca podrá exportarlos á ningún punto de las Filipinas como no sea de tránsito para el extranjero, á no obtener una autorizacion especial cada caso del Gobierno General del Archipiélago. 3.º Si pareciese conveniente á V. E. explicar una disposicion especial el alcance de la concesion convendría declarar que no están comprendidos en ella los puertos como de dominio público y que Canga Argüelles no puede traspasar dicha concesion sin previa autorizacion del Gobierno. 4.º Respecto á la creacion de la Aduana, la Seccion entiende que procede oír antes de resolver este punto el parecer de la Direccion general de Hacienda de ese Ministerio, pues en este punto no obran en el expediente los antecedentes necesarios. 5.º Si V. E. se conforma con este dictamen y resuelve el expediente en los términos que propone la Seccion, deberá darse traslado de la resolucion de S. M. al Sr. Ministro de Estado recomendándole que por todos los medios de que dispone en países extranjeros haga públicos los términos de la concesion otorgada á D. Felipe Canga Argüelles para que no pueda este ni otra persona atribuirse facultades ni derechos que el Gobierno no le ha concedido, ni podría conceder sin autorizacion legislativa, con arreglo á la constitucion del Estado. En su vista: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino se han servido resolver con esta fecha lo siguiente. Primeramente que el Sr. Canga Argüelles no está autorizado para efectuar ni total ni parcialmente el traspaso de la concesion que tiene hecha para explotar una parte de la Isla de la Paragua, sin obtener antes autorizacion del Gobierno, que será dueño de negarla ó de concederla; que la representacion de la empresa explotadora ha de recaer siempre indispensablemente en un sujeto Español; que en la Colonia no habrá más leyes, jurisdiccion, ni más autoridad, ni más procedimientos que los de España; que en ninguna parte del territorio que se le tiene asignado, podrá arbolarse por pretexto alguno otro pabellon que el Español, el mismo que en las embarcaciones que pertenecen á la explotacion, que deberán estar inscritas con su cion á lo determinado, y que la menor trasgresion á estas prevenciones, ó la menor reclamacion de carácter internacional que se presente por su inobservancia, dará lugar á que se le retire en absoluto en la concesion, cualquiera que sea el estado de los

que tenga hechos. Segundo: Que en concepto de no puede considerarse el Sr. Canga Argüelles, como de los puertos ó fondeaderos comprendidos en las costas que limitan con el mar, el terreno concedido por que solo pueden ser del Estado, según la ley de 13 de Junio de 1879. Tercero: El Gobernador de la Paragua presta toda su atención á que se cumplan las expresadas disposiciones y obrará con arreglo á las circunstancias, puestas á las instrucciones que para su cumplimiento reciba del Gobernador General del Archipiélago, el cual tendrá el deber de participar cualquiera irregularidad que observe en la marcha de la Colonia. Siendo de 200 hectáreas la primera extensión de terreno que el Sr. Canga Argüelles, tiene obligada de poner en cultivo, se le permitirá que de acuerdo con el funcionario que el Gobernador General designe, establezca la demarcación de las referidas 200 hectáreas, y á poner en cultivo, y únicamente en estas, que se consentirá el hacer cortas de maderas. De las maderas que se exporten, tomará nota la Aduana correspondiente, valorándolas al propio tiempo para el importe al Sr. Canga Argüelles, si no cumpliera el compromiso de poner en cultivo las 200 hectáreas. Una vez cumplido este compromiso y recordado así por el funcionario que designe el Gobernador General, se hará una nueva demarcación de otras 200 hectáreas y con igual objeto y bajo las mismas condiciones que las anteriores y así sucesivamente. Después de poner en cultivo las hectáreas comprendidas en alguna demarcación se abandonase dicho cultivo, no tendrá derecho el Sr. Canga Argüelles á que se efectúen nuevas demarcaciones; que serán prohibidas interin no tenga en cultivo todas las hectáreas en las cuales fué autorizado para poner maderas y todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 4.º de la Real orden de 20 de Agosto de 1888. Quinto: También quedará obligado á no extraer madera alguna procedente de la explotación, á un punto de las Islas Filipinas, como no sea tránsito para el extranjero á no obtener una autorización especial para cada caso del Gobierno General. Sexto: De esta resolución se dará traslado al Ministro de Estado recomendándole que por todos los medios de que dispone en países extranjeros, haga públicos los términos de la concesión otorgada al Sr. Felipe Canga Argüelles, para que no pueda esta persona en su nombre atribuirse facultades de derechos que el Gobierno no le ha concedido ni que concederle sin autorización legislativa, con arreglo á la constitución del Estado. Séptimo: Que respecto de la creación de la Aduana en Puerto Príncipe, debe tramitarse y acordarse el oportuno expediente por la Dirección general de Hacienda del Ministerio de Ultramar. De Real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes, siendo publicarse íntegra esta resolución en las «Gacetas de Madrid y de Manila». Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid, 24 de Mayo de 1890.—Becerra.—Al Gobernador General de Filipinas. Manila, 16 de Julio de 1890.—Cúmplase, publíquese y pase á la Dirección general de Administración para los efectos que procedan.

WEYLER.

Hacienda.

MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 603.—Excmo. Sr. artículo 17 de la ley de presupuestos de la Isla de Cuba para 1890-91, promulgada el 18 del corriente y publicada en la «Gaceta de Madrid» núm. 173 de ayer, comprende varios preceptos y reglas relativos á la Contabilidad del Estado en las provincias de Ultramar, los cuales deben ser conocidos por diversos funcionarios de la Administración y más especialmente por aquellos á quienes más directamente afecta su observancia, como son además de Jefes de Centros ó oficinas, los Ordenadores y Contadores ó Interventores de Pagos. En tal concepto: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer se publique á V. E. la necesidad de que se sirva llamar la atención de los expresados funcionarios sobre la necesidad de que tenga debido cumplimiento lo dispuesto en dicho artículo se preceptúa.—De Real orden digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos, y á fin de que se sirva disponer se publique esta disposición en la «Gaceta» de esa Capital.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid, 23 de Junio de 1890.—Becerra.—Sr. Gobernador General de Filipinas. Manila, 29 de Julio de 1890.—Cúmplase, publíquese y pase á la Intendencia general de Hacienda, para los efectos correspondientes.

WEYLER.

MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 598.—Excmo. Sr.—ley de presupuestos de la Isla de Cuba para 1890-91, promulgada por S. M. en 18 del corriente y publicada en la «Gaceta de Madrid» núm. 173 fecha de

ayer, contiene algunos preceptos legislativos que por su carácter general, son de inmediata aplicación á ese Archipiélago, donde deberán ser observados, y al efecto, el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino se ha servido disponer se remita á V. E., como o verifíco, un ejemplar de la «Gaceta» mencionada, á fin de que guarde y cumpla en esas Islas lo dispuesto en los artículos dieciséis, diecisiete, dieciocho, veintidos, veintitres, veinticuatro, veinticinco, veintiseis, veintisiete y treinta de la precitada ley de 18 del corriente mes, así como también el 14 de la de 29 de Junio de 1888, declarado subsistente, siendo asimismo la voluntad de S. M. que los mencionados preceptos se publiquen íntegros en la «Gaceta» de esta Capital para su debido y general conocimiento.—De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos que se disponen.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid, 23 de Junio de 1890.—Becerra.—Sr. Gobernador General de Filipinas. Manila, 29 de Julio de 1890.—Cúmplase, publíquese y pase á la Intendencia general de Hacienda, para los efectos correspondientes.

WEYLER.

Artículos que se citan:

Art. 16. El Gobierno procederá á surtir de moneda de todas clases de ley y cuño español los mercados de las provincias y posesiones españolas de Ultramar, en la cantidad que estime necesaria para las transacciones, aplicando á los gastos que este servicio exija las utilidades que puedan resultar de la acuñación (en la Casa de Moneda de Madrid) de las pastas que se adquirieran ó de la recaudación de la moneda que hoy existe en aquellos países, si, previa determinación de su valor, se acordase la recogida y canje.

Se hace extensivo á todas las provincias y posesiones españolas de Ultramar, lo dispuesto para la Isla de Cuba respecto al beneficio de 6 por 100 que disfrutaban las monedas de oro de cuño español de todas clases en las transacciones particulares y las que verifiquen con sus Tesoros.

Art. 17. 1.º Durante el ejercicio del presupuesto no podrán crearse más obligaciones en las provincias de Ultramar que las contenidas dentro del importe de los créditos legislativos, salvo circunstancias extraordinarias, siendo personalmente responsables al Tesoro de la isla, de los perjuicios que pudieran irrogarse por la infracción de lo prescrito, los Jefes de los diversos Ramos ó las Autoridades que dispongan la ejecución de los servicios no autorizados en presupuestos, ó que excedan en su importe de lo que permita el crédito autorizado.

2.º En igual responsabilidad personal incurrirán los Ordenadores, Contadores ó Interventores de pagos, sea cualquiera la clase y categoría á que pertenezcan, por toda obligación que reconozcan ó liquiden sin crédito previo suficiente, y por los pagos que se ejecuten con infracción de lo dispuesto en el párrafo anterior, á no ser que habiendo hecho presente por escrito su improcedencia y las razones en que la funda, al Jefe del Centro respectivo á que corresponda el servicio, éste ordene á ambos la liquidación ó el abono, que se verificará entonces bajo la responsabilidad del Jefe ó autoridad que lo ordene.

Llegado este caso, lo pondrá en conocimiento del Ministro de Ultramar para que dicte la resolución oportuna.

3.º Únicamente en los casos de exigirlo el mayor servicio que pueda producirse por grave alteración del orden público y estar interrumpida la línea telegráfica, los Gobernadores Generales podrán conceder créditos supletorios ó extraordinarios con aplicación al presupuesto que se aprueba.

4.º En los demás casos, y antes que se ejecuten los servicios que carezcan de crédito expresamente autorizado, ó no baste el legislativo, se concretará á remitir al Ministro de Ultramar los expedientes de concesión ó ampliación tramitados, con sujeción á lo dispuesto en la ley y reglamento de contabilidad vigentes, y con informe de Consejo de Administración en pleno. Estos créditos si fueran ampliables, serán concedidos precisamente en Consejo de Ministros, previo informe del de Estado en pleno, dando cuenta á las Cortes; pero si la atención fuera de carácter extraordinario ó no estuviera comprendida en la relación de créditos ampliables ó acordada por la ley de Presupuestos, y las Cortes estuvieran abiertas, deberá remitirse á éstas el oportuno proyecto de ley.

5.º No podrán verificarse transferencias de crédito más que entre los conceptos comprendidos en un mismo artículo, y su aprobación corresponde al Gobernador General, previa formación del oportuno expediente, y siempre que sea de acuerdo con el informe de la Intendencia de Hacienda ó del Consejo de Administración, remitiéndose en otro caso para su resolución al Ministerio de Ultramar, y en todo caso para su conocimiento.

6.º Prohibidos los pagos en suspenso, solo se autorizará el de aquellas cantidades cuyos justificantes no puedan obtenerse al tiempo de expedirse el libramiento, con aplicación desde luego á los capítulos

y artículos correspondientes, quedando obligados á la justificación en el improrrogable plazo de tres meses, los encargados del servicio á que dichos libramientos se refiriesen.

Pasado dicho término sin haberlo efectuado, se exigirá de quien corresponda el reintegro inmediato de la cantidad entregada.

7.º Los derechos que con arreglo á las disposiciones vigentes se reconozcan y liquiden por las oficinas de Hacienda en concepto de premios de expedición ó recaudación, se satisfarán desde luego previa la justificación correspondiente, en concepto de minoración de ingresos de los conceptos respectivos.

8.º Los haberes devengados por los funcionarios de la Administración del Estado que se reconozcan y liquiden con posterioridad al cierre definitivo del presupuesto de que procede la obligación, podrán ser satisfechos en concepto de «gastos á formalizar», comprendiéndose el crédito necesario en el capítulo de ejercicios cerrados del proyecto de presupuestos siguientes. Para que se verifique el pago será preciso concurrir la circunstancia de que en el presupuesto respectivo figurase taxativamente el empleo y haberes, origen del devengo.

9.º Se considerarán ampliados los créditos siguientes: Primero. Los correspondientes en las Secciones de Guerra y Marina para la recomposición, construcción de buques y material de artillería, por la cantidad que produzca la enagenación del material inútil para el servicio.

Segundo. Los señalados para las atenciones de clases pasivas por las obligaciones nuevas que se reconozcan y liquiden durante el ejercicio, con arreglo á las leyes.

Tercero. Los concedidos para todas las atenciones del servicio de la deuda del Tesoro público, por la mayor extensión que puedan alcanzar, con arreglo á las leyes.

Cuarto. Los correspondientes á ingresos indebidos y ejercicios cerrados por las obligaciones comprendidas dentro de los créditos autorizados en los presupuestos á que aquellas se refieran, previo reconocimiento y liquidación aprobada por el Ministerio de Ultramar.

10. Durante cada ejercicio podrá contraerse deuda flotante para cubrir provisionalmente obligaciones del mismo, hasta el 25 por 100 del total importe del presupuesto.

Dentro de este límite queda el Gobierno facultado para adquirir sumas á préstamo ó realizar cualquiera operación de Tesorería; pero solo en el caso de guerra ó de grave alteración del orden público, podrá traspasar el máximo antes fijado para allegar recursos por este concepto.

11. Las gratificaciones reglamentarias, así civiles como militares y de marina, no podrán exceder del doble que en la Península.

Los Ordenadores ó Interventores de pagos serán responsables personalmente al Tesoro de la isla, de los perjuicios que se le ocasionen por infracción de lo prescrito, aun cuando por error figurara en el pormenor del presupuesto de gastos mayor cantidad que la que corresponda á cada funcionario.

12. Las cuentas que con arreglo á las vigentes disposiciones de contabilidad se rinden mensualmente al Tribunal de las del Reino, serán trimestrales á partir del presente ejercicio, á excepción de las del Tesoro y de Caja, que continuarán rindiéndose mensualmente.

13. El Ministro de Ultramar fijará la fecha en que deban comenzar á regir los años económicos porque se regularán los presupuestos provinciales y municipales que se formen con posterioridad á la publicación de la presente ley.

Art. 18. Se autoriza al Gobierno para el establecimiento del Giro mútuo entre la caja del Ministerio y los Tesoros de Ultramar, y de estos, entre sí, en la forma y modo que crea más conveniente.

Art. 22. Las Salas de Ultramar del Tribunal de Cuentas del Reino, están asimiladas á las de la Península, formando parte integrante del mismo; se regirán por las disposiciones que regulen las funciones de aquel Centro, pero con las modificaciones siguientes:

Para ser nombrado en lo sucesivo Ministro de dichas Salas, se necesitará estar comprendido en alguno de los casos siguientes:

1.º Ser ó haber sido Senador ó Diputado en cuatro legislaturas ó en dos Cortes diferentes, reuniendo, además, alguna de las circunstancias que se expresan á continuación.

Haber desempeñado en Ultramar, durante cuatro años, puestos de Jefe Superior de Administración, ó durante seis años el de Jefe de Administración de primera clase.

Haber servido en la Administración ultramarina por lo menos quince años, y estar en posesión de la categoría de Jefe de Administración de primera clase. Haber desempeñado durante cualquier tiempo el cargo de Jefe Superior de Administración en Ultramar, y contar además quince años de ejercicio de abogacía.

2.º Haber desempeñado cargo de Jefe Superior de Administracion ó contar más de dos años de Jefe de Administracion de primera clase, y ser ó haber sido Diputado ó Senador por Cuba ó Puerto Rico en cuatro legislaturas ó en dos Cortes diferentes:

3.º Haber desempeñado en Ultramar puesto de Jefe Superior de Administracion durante dos años, ó de Jefe de Administracion de segunda clase durante cuatro años, contando, además, y en ambos casos, quince años de servicios en cualquiera de las carreras del Estado en Ultramar.

4.º Para ser nombrado Ministro letrado se necesita estar comprendido en alguno de los casos siguientes: Ser ó haber sido Senador ó Diputado por Cuba ó Puerto Rico en cuatro legislaturas ó en dos Cortes diferentes habiendo además ejercido la abogacia durante quince años en aquellos Tribunales.

Ser ó haber sido durante dos años Regente ó Presidente de las Audiencias de Ultramar, ó bien Presidente, Fiscal ó Presidente de Sala de la Audiencia de la Habana, contando además quince años de servicios al Estado.

Reunir las condiciones de esta ley para desempeñar las otras plazas de Ministro de las Salas de Ultramar y la cualidad de Letrado.

Los Ministros que sean nombrados con arreglo á las condiciones de esta ley, tendrán carácter de inamovibles.

Los nombramientos se harán por la Presidencia del Consejo de Ministros.

Art. 23. El Ministro de Ultramar procederá á reorganizar al personal administrativo dependiente de dicho Ministerio y que no constituya carreras regidas por leyes especiales, dictándose al efecto un decreto, que tendrá fuerza de ley y se publicará antes del 15 de Octubre próximo, del cual dará cuenta á las Cortes. Para la redacción de dicho decreto se tendrán en cuenta las siguientes bases.

1.ª El ingreso, ascenso y separacion se ajustarán á lo que disponga la ley que rija para los empleados de la Administracion Civil de la Península, debiéndose, no obstante, ampliar las condiciones relativas al ingreso en cuanto fuere necesario para garantizar los conocimientos especiales que requiere la administracion ultramarina. Los beneficios y aptitudes que en la citada ley de la Península se reconozcan á los individuos que pertenezcan ó hayan pertenecido al Ejército, se harán extensivos en Ultramar á los que lleven seis años de servicio en los cuerpos militarmente organizados de milicias, voluntarios y bomberos.

2.ª Se reconocerán los servicios prestados en las Corporaciones que auxilian la Administracion Central de Cuba, en Puerto Rico y Filipinas, fijándose las respectivas categorías.

3.ª Se determinará el número y categorías de los destinos que habrán de proveer por las Autoridades Superiores de las Islas.

4.ª Asimismo se determinará el número y clase de destinos del Ministerio de Ultramar y oficinas dependientes del mismo establecidas en la Península, que habrán de proveer precisamente en funcionarios que hayan servido en las provincias y posesiones ultramarinas.

5.ª Los funcionarios activos y cesantes de la Administracion Civil de la Península y los de la carrera de Ultramar que sirvan en el Ministerio y oficinas establecidas en Madrid bajo la dependencia del mismo, podrán ser nombrados, en turnos de eleccion ó de cesantes, para servir en las provincias y posesiones ultramarinas con un ascenso, cualquiera que sea el tiempo que lleven en su categoría, y con dos si les faltase menos de seis meses para poder ascender por eleccion en la Península.

Los funcionarios activos y cesantes de las provincias y posesiones ultramarinas podrán pasar á la Administracion Civil de la Península en los turnos de eleccion ó de cesantes, ó ser destinados al Ministerio de Ultramar, reconociéndoseles la categoría que disfruten si llevasen más de dos años en ella.

6.ª Se restablecerá la asimilacion de los empleados de la Direccion general de Gracia y Justicia, y demás funcionarios del Ministerio á quienes correspondiese, con los de la carrera judicial.

7.ª Se concederá pasaje de ida y vuelta por cuenta del Estado á los funcionarios nombrados para las provincias y posesiones de Ultramar y á sus familias, y el equivalente de dos mensualidades del total haber á los causa habientes de los empleados que falleciesen en el desempeño de su cargo, determinándose en el decreto los límites y condiciones de una y otra concesion.

8.ª Se tendrá en consideracion, en cuanto no se oponga á las precedentes bases, lo propuesto por la comision de reformas administrativas de Ultramar en 10 de Julio de 1888, y especialmente en lo que se refiere á correcciones disciplinarias, conceptuacion de los empleados y recompensas á los que presten servicios meritorios y extraordinarios, ampliándolo en la forma que se estime más conveniente á depurar la aptitud, inteligencia y moralidad de aquellos.

El decreto que se dicte en cumplimiento de lo pre-

ceptuado en este artículo, no podrá, una vez que de él se haya dado cuenta á las Cortes, ser alterado ni modificado sino por virtud de una ley.

Art. 24. Se considerarán como servicios en Ultramar para los efectos de esta ley, los prestados en el Ministerio de Ultramar ó sus dependencias en la Península y en las provincias y posesiones españolas de Ultramar.

Art. 25. El Gobierno, oyendo á la Comision codificadora de Ultramar, procederá á compilar y unificar por medio de un decreto, que se publicará antes de 1.º de Enero de 1891, que tendrá fuerza de ley, y del cual dará cuenta á las Cortes, las disposiciones vigentes sobre organizacion de la administracion de justicia en las provincias y posesiones ultramarinas, aplicando con las modificaciones que estime acertadas, cualesquiera otras que rijan en la Península, y otorgando en favor de los naturales y residentes en aquellos territorios, las consideraciones y aptitudes que se estimen oportunas. En dicho decreto se determinarán las facultades de inspeccion que ejercerán en todo el territorio de los respectivos Gobiernos generales, el Presidente y Fiscal de Audiencia de la Habana y de la de Manila.

Los Ministros de Gracia y Justicia y Ultramar adoptarán, de acuerdo y dentro del plazo expresado, las disposiciones necesarias á fin de hacer efectivo el derecho que la ley de 19 de Agosto de 1885 otorga á los funcionarios de las carreras Judicial y Fiscal de Ultramar para su traslacion ó ascenso á todos los Tribunales y Ministerio fiscal de la Península.

Art. 26. Se autoriza al Gobierno para crear una Seccion de Ultramar en la Junta de Pensiones civiles, si por la nueva organizacion que esta obtenga en virtud de una ley, lo considerase necesario.

Art. 27. La facultad concedida al Ministro de Ultramar por el art. 21 de la ley de Presupuestos de 1888 á 89, se entenderá sin perjuicio de que los funcionarios procedentes de oposicion pública asciendan á la categoría inmediata superior.

Art. 30. En el reglamento sobre ejecucion de la ley de 19 Julio de 1889 acerca del destino de Jefes y Oficiales del Ejército á los distritos militares de Ultramar, se introducirán las reglas necesarias, á fin de que desaparezca la excedencia á que dá lugar la aplicacion estricta de los artículos 1.º y 5.º de dicha ley.

Secretaría.

Negociado 3.º

El Excmo. Sr. Gobernador General á propuesta del Sr. Presidente de la Real Audiencia de Manila, ha tenido á bien nombrar Jueces de Paz y Sustitutos durante el presente bienio de 1890 á 1892, á las personas que á continuacion se expresan, determinando los pueblos y los cargos para que han sido nombrados.

Provincia de Camarines Norte.

Daet.	Juez de Paz.	D. Juan Gutierrez Gay.
Idem.	Sustituto.	» Jorge Enrique Villan.
Talisay.	Juez de Paz.	» Blas Cuaño.
Idem.	Sustituto.	» Florencio Isaac.
Colasgasan.	Juez de Paz.	» Adriano Barredo Abad.
Idem.	Sustituto.	» Gregorio Moreno.
S. Vicente.	Juez de Paz.	» Catalino Teodorico.
Idem.	Sustituto.	» Camilo Moreno Abanes.
Basud.	Juez de Paz.	» Benito Rivera.
Idem.	Sustituto.	» Tomas Rosalinas y G.º
Paracale.	Juez de Paz.	» Brigido Sanchez.
Idem.	Sustituto.	» Miguel Oaña.
Capalonga.	Juez de Paz.	» Raymundo Fermo.
Idem.	Sustituto.	» Martiniano Iglesias.

Provincia de la Union.

S. Fernando.	Juez de Paz.	D. Patricio Flores.
Aringay.	Sustituto.	» Severo Maglaya.
Agoo.	Juez de Paz.	» Tomás Villanueva.
Idem.	Sustituto.	» Alejo Sison.
Rosario.	Juez de Paz.	» Mariano Posadas.
Idem.	Sustituto.	» Máximo Estacio.
Sto. Tomás.	Idem.	» Nicasio Zárate.
Bacnotan.	Juez de Paz.	» Paulino Dacanay.
Idem.	Sustituto.	» Emerenciano de Pádua.
Bangar.	Juez de Paz.	» Silvino Vergara.
Idem.	Sustituto.	» Simon Lopez.
Naguilian.	Juez de Paz.	» M. ximo Flores.
Idem.	Sustituto.	» Enrique Sete.
Bauang.	Juez de Paz.	» Fabian Sanchez.
Idem.	Sustituto.	» Hilario Calica.

Provincia de la Laguna.

Sta. Cruz.	Juez de Paz.	D. Celestino Dimayuga.
Idem.	Sustituto.	» Gertrudo de los Reyes.
Calamba.	Juez de Paz.	» Vicente Laureola Roque.
Idem.	Sustituto.	» Pantaleon Quintero.
S. Pedro de Tinasan.	Juez de Paz.	» Florencio Amado.
Idem.	Sustituto.	» Juan Olivares.
Biñan.	Juez de Paz.	» Justino Janjaoco.
Idem.	Sustituto.	» Pastor de Silva.
Sta. Maria.	Juez de Paz.	» Cayetano Real Caiuag.
Idem.	Sustituto.	» Juan Pantoja.
Calauan.	Idem.	» Mariano Marfori.
Sta. Rosa.	Juez de Paz.	» Marcelo Leyco.
Idem.	Sustituto.	» Honorio Tiongco.
Pagsanjan.	Juez de Paz.	» José Rivera.
Idem.	Sustituto.	» Alvaro Fernandez.
Cabuyao.	Juez de Paz.	» Felipe del Callar.
Idem.	Sustituto.	» Domingo Delfino.
San Antonio.	Juez de Paz.	» Rodolindo Lapuente.
Idem.	Sustituto.	» Juan Eliseo.

Nagcarlan.	Juez de Paz.	D. Mariano Manalag.
Idem.	Sustituto.	» Juan Peñaflor.
Cavinti.	Juez de Paz.	» Jacinto Ramos.
Idem.	Sustituto.	» Valentin de la T.
Bay.	Juez de Paz.	» Martin Leon Lad.
Idem.	Sustituto.	» Mónico Elechosa.
Paquil.	Juez de Paz.	» Cipriano Isurena.
Idem.	Sustituto.	» Pedro Dalena.
Parítil.	Juez de Paz.	» Anacleto Rañoa.
Idem.	Sustituto.	» Anselmo Santa A.
Los Baños.	Juez de Paz.	» Zacarias de los R.
Idem.	Sustituto.	» Nicasio Villegas.
Majayjay.	Juez de Paz.	» Martin A. Pangos.
Idem.	Sustituto.	» Francisco Pontiv.
Longos.	Juez de Paz.	» Pedro Sabio.
Idem.	Sustituto.	» Bernabé R. niag.
Magdalena.	Juez de Paz.	» Salvador Zaido.
Idem.	Sustituto.	» Fernin de San J.
Lilio.	Juez de Paz.	» Esteban Araves.
Idem.	Sustituto.	» Sergio Hombreh.
Siniloan.	Juez de Paz.	» Bonifacio B. Pag.
Idem.	Sustituto.	» Luis Obteza.
Mavitac.	Juez de Paz.	» Mariano Aguilar.
Idem.	Sustituto.	» Simplicio S. Vi.
Alaminos.	Idem.	» Honorio Reyes.
Luisiana.	Juez de Paz.	» Pioquinto Fabris.
Idem.	Sustituto.	» Ubaldo Suello.

Manila, 5 de Agosto de 1890.—A. Monroy.

El Excmo. Sr. Gobernador General se ha dispuesto que para general conocimiento, se pue en la Gaceta el nombre del Teniente absoluto ha sido elegido para el presente bienio de 1892, en el pueblo que á continuacion se expre

Distrito de Tiagan.

San Emilio. D. Gregorio Malines. 3.ª lpa
Manila, 5 de Agosto de 1890.—A. Monroy.

Negociado 4.º

En cumplimiento al superior decreto de es bierno General de 23 de Octubre de 1889, pu en la «Gaceta de Manila» núm. 294 de mismo mes, ha dispuesto el Excmo. Sr. Gobe General, Vice Real Patrono, que se anuncie curso para proveer las dos plazas de Médicos plentes del Hospital de S. Juan de Dios de es pital, creadas por el Decreto antes citado y forma que en él se indica.

Y en su consecuencia los que aspiren á obte presentarán sus instancias documentadas en cretaría de este Gobierno General antes del día Setiembre próximo venidero.

Lo que de orden de S. E. se publica en la ceta oficial para general conocimiento.

Manila, 5 de Agosto de 1890.—El Secretario Monroy.

Parte militar.

GOBIERNO MILITAR.

Servicio de la Plaza para el día 6 de Agosto de Parada y vigilancia, Artillería y núm. 73 de día, el Comandante de Artillería, D. Enrique llamor.—Imaginería, otro del mismo, D. Bar Aguado.—Hospital y provisiones, núm. 73, ter pitan.—Reconocimiento de zacate y vigilancia m Artillería.—Paseo de enfermos, núm. 73.—Mús la Luneta, núm. 69.

De orden de S. E.—El Teniente Coronel Sa mayor, José García.

Anuncios oficiales

GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA

DE MANILA.

Secretaría.

En el Tribunal de Taguig se encuentra dep un carabao bagontao con marcas sin dueño co

Lo que de orden del Sr. Gobernador Civil, se cia al público para que las personas que se ren con derecho al mismo, acudan con los do tos de propiedad en la Secretaría de este G dentro del término de diez días; en la intelligen trascurrido este plazo sin reclamacion alguna cederá á su venta en pública subasta.

Manila, 2 Agosto de 1890.—Enrique Pintó.

ADMINISTRACION DE HACIENDA PUBLICA

DE MANILA.

Esta Administracion pone en conocimiento RR. Curas Párrocos y Coadjutores de esta que en los días 7 al 16 del actual, se abra la misma Dependencia el pago de sus haberes rrespondientes al mes de Julio próximo con arreglo á lo consignado en el vigente presu

Manila, 4 de Agosto de 1890.—Juan Pach

nalas
or.
os.
la T
a La
hosa
rena.
a.
ñoa.
ata A
los R
egas.
angos
ontiv

diag.
do.
an J
ves.
breu
Pago

uillar.
Vie
ya.
Fabr
ello.
y.

ha
se p
solu
de
expre

ar l
roy.

e es
pu
de
Gob
cie
di
de
y

ob
en
retar

to d
73
anip
Bern
tem
a m
-Má
68

u
IA

de
o co
se
do
do
G
gen
na
ta.
a.
Bla

	IMPUESTO DE				Observaciones.			
	Carga.		Descarga.		Consumo.		Total.	
	Pesos.	Gént.	Pesos.	Gént.	Pesos.	Gént.	Pesos.	Gént.
Manila.	50523 30	25061 74	29937 95	11 03	14167 45	140147 28	140147 28	
Iloilo.	32774 57	15707 47	121	»	8601 39	74193 22	74193 22	
Cebu.	2124 99	1062 49	»	»	6335 43	6335 43	6335 43	
Zamboanga.	»	»	»	»	1087 58	276	276	
Total en de 1890.	85392 86	41831 70	29989 16	11 03	23856 42	220678 69	220678 69	
Idem en de 1889.	142496 34	»	50057 47	76 32	11082 69	227973 11	227973 11	
Diferencias de más.	»	41831 70	»	»	12773 73	»	»	
Idem de menos.	77103 48	»	20118 31	65 29	»	7204 42	7204 42	
						7294 42	7294 42	

Manila, 4 de Agosto de 1890.—El Contador Central.—P. S.—Ricardo Alvarez.—V. O. B.—El Administrador Central, M. Lahora.

SECCION DE GUARDIA CIVIL VETERANA.

ESTADO que resume las aprehensiones hechas en dicho mes, por todos los puestos de este Cuerpo.

Mes de Julio de 1890.

Subdivisiones	Mes de Julio de 1890.												Totales.
	Por robo.	Por sospechas de idem.	Por hurto y estafa.	Por riña y heridas.	Por amenazas de muerte.	Por maltrato de obra.	Por violencia.	Por embriaguez y escándalo.	Por indocumentados y andar a deshora de la noche por la calle sin motivo justificado.	Por vagos sospechosos.	Por quintos prófugos.	Por desertores y fugados de cárceles.	
1. Manila, Intramuros.	3	1	4	»	»	»	»	1	11	1	2	1	53
2. Sampaloc, San Miguel, San Sebastián y Tanduay.	3	1	»	»	»	»	»	3	5	2	1	2	77
3. Tondo y el barrio de San Lázaro.	12	5	3	1	»	»	»	29	20	3	4	6	130
4. Santa Cruz, Quiapo y San José, Trozo.	35	3	1	»	»	»	»	16	16	3	4	4	167
5. Binondo.	3	»	»	»	»	»	»	7	7	»	»	»	145
6. Hermita y Malate.	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	24
Puesto de San Fernando de Dilao y Concepción.	62	12	8	3	1	»	»	15	88	21	1	19	650
Total.	128	28	15	5	1	»	»	88	21	89	138	27	650

Manila, 1.º de Agosto de 1890.—El Teniente Coronel Jefe, Ricardo Ruiz.—V. O. B.—El Gobernador Civil,—P. O., Pintó.

SECRETARIA DE LA COMANDANCIA GENERAL DEL ARSENAL DE CAVITE Y DE LA JUNTA DE ADMINISTRACION Y TRABAJOS.

Por disposición del Excmo. Sr. Comandante general del Apostadero se anuncia al público que el 11 del entrante Agosto á las diez de su mañana, se sacará á público concurso por 2.ª vez, con motivo de haber resultado desierta la 1.ª, el urgente suministro de los materiales necesarios para la construcción de 2 calderetas de acero con destino á las lanchas número 1 y 2 del vapor «Argos», con estricta sujeción al pliego de condiciones inserto en la «Gaceta de Manila» núm. 176 de 27 de Junio último, cuyo acto tendrá lugar ante la Junta especial de subastas que al efecto se reunirá en este Establecimiento en el día expresado y una hora antes de la señalada dedicando los primeros 30 minutos á las aclaraciones que deseén los licitadores ó puedan ser necesarias y los segundos para la entrega de las proposiciones á cuya apertura se procederá terminado dicho último plazo.

Las personas que quieran tomar parte en dicha subasta presentarán sus proposiciones con arreglo á modelo, en pliegos cerrados, extendidas en papel del sello competente acompañadas del documento de depósito y de la cédula personal, sin cuyos requisitos no serán admisibles; advirtiéndose que en el sobre de los pliegos deberá expresarse el servicio, objeto de la proposición, con la mayor claridad y bajo la rúbrica del interesado.

Cavite, 29 de Julio de 1890.—Eduardo

GOBIERNO P. M. DE MORONG.

El Tribunal de esta Cabecera se encuentran de un carabao y una caraballa, con marcas, sin conocido.

que se anuncia al público para que las perque se consideran con derecho á los mismos, con los documentos de propiedad en este Gobierno dentro del término de treinta días, en la inancia de que trascurrido este plazo sin reclamación alguna, se procederá á su venta en pública

ong, 31 de Julio de 1890.—Nouvila

el Tribunal de esta Cabecera se encuentra de un carabao, con marcas, sin dueño conocido. que se anuncia al público para que las perque se consideran con derecho al mismo, acudan los documentos de propiedad en este Gobierno del término de treinta días, en la inteligen-

cia de que trascurrido este plazo sin reclamación alguna, se procederá á su venta en pública subasta. Morong, 31 de Julio de 1890.—Nouvila.

ADMINISTRACION CENTRAL DE ADUANAS DE FILIPINAS.

ESTADO numérico de los cadáveres que desde las ocho del día de ayer á igual hora del día hoy 5 del actual han sido enterrado en los Cementerios del Distrito municipal con expresión de razas y sexos.

CEMENTERIOS	ADULTOS.				PARVULOS.				CHINOS TOTAL			
	Españoles.	Mestizos Sangleyes.	Indios.	Indios.	Españoles.	Mestizos Sangleyes.	Indios.	Indios.	Varones.	Hembras.	Varones.	Hembras.
Paco (Nichos).	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Loma (Cementerio general).	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Tondo.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Binondo.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Santa Cruz.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Sampaloc.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ermita.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Malate.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Dilao.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Loma (Chinos).	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Total.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Manila, 5 de Agosto de 1890.—El Secretario, Bernardino Marzano.—V. O. B.—El Corregidor, Perojo.

Mes de Julio de 1890.

ESTADO demostrativo del oro y plata importados y exportados en las Aduanas de estas Islas, durante la 2.ª quincena del mes.

	ADUANAS.				ORO.				PLATA.			
	Moneda Española.	Moneda Extranjera.	En bruto.	Total.	Moneda Española.	Moneda Extranjera.	Moneda Mejicana.	Total.	Moneda Española.	Moneda Extranjera.	Moneda Mejicana.	Total.
	Pesos.	Pesos.	Pesos.	Pesos.	Pesos.	Pesos.	Pesos.	Pesos.	Pesos.	Pesos.	Pesos.	Pesos.
Manila.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Iloilo.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cebu.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Zamboanga.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Atimonan.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
TOTAL.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Manila, 2 de Agosto de 1890.—El Contador Central, P. S., Ricardo Alvarez.—V. O. B.—El Administrador Central, M. Lahora.

ADMINISTRACION CENTRAL DE LOTERIAS Y EFECTOS TIMBRADOS.

El día 7 de Agosto próximo a las ocho en punto de la mañana y en el local de costumbre, se verificará el 8.º sorteo de la Lotería Nacional Filipina del presente año.

Lo que se anuncia al público para su conocimiento.
Manila, 31 de Julio de 1890.—Federico Ordax. 1

BANCO ESPAÑOL FILIPINO.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno se anuncia al público que en el presente semestre continúa rijiendo el mismo interés que en el anterior, para las operaciones con este Establecimiento, en virtud de autorización del Excmo. Sr. Protector.

Secretaría del Banco a 1.º de Agosto de 1890.—Matías S. de Vizmanos y Lecároz. 1

MAYORIA GENERAL DEL APOSTADERO Y ESCUADRA DE FILIPINAS.

Debiendo proveerse treinta plazas de Ayudantes de máquina eventuales, previo examen, para el servicio de los buques de esta Escuadra, se anuncia al público a fin de que los que se consideren aptos para desempeñar dichas plazas eleven sus solicitudes al Excmo. Sr. Comandante general del Apostadero, dentro del plazo de 30 días, a contar desde la fecha de esta publicación, debiendo los solicitantes acompañar sus respectivas partidas de bautismo, un certificado expedido por el Gobernadorcillo del pueblo de su naturaleza o vecindad en que conste ser de buena conducta y no ejercer cargo alguno concejil, y otro que acredite reunir las condiciones que se exigen en los párrafos 4.º, 5.º, 7.º, y 8.º del art. 2.º del reglamento de Maquinistas de la Armada coleccionado en 1.º de Enero de 1885.

Cavite, 30 de Julio de 1890.—Rafael Cabezas.

SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES ALMONEDAS.

El día 26 de Agosto próximo venidero a las diez de su mañana, se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, que se constituirá en el Salon de actos públicos del edificio llamado antigua Aduana y la del Gobierno Civil de la provincia de Camarines Sur, la venta de un terreno baldío realengo denunciado por D. Manuel Abella, enclavado en el sitio denominado Tinalmud, jurisdicción del pueblo de Libmanan de dicha provincia, bajo el tipo en progresión ascendente de pfs. 4456.27 y con estricta sujeción al pliego de condiciones publicado en la «Gaceta» de esta Capital, núm. 213 de fecha 5 de Agosto del año último.

La hora para la subasta de que se trata, se registrará por la que marque el reloj que existe en el Salon de actos públicos.

Manila, 26 de Julio de 1890.—Abraham García García. 1

El día 16 de Agosto venidero a las diez de su mañana, se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, que se constituirá en el Salon de actos públicos del edificio llamado antigua Aduana y la subalterna de la provincia de Isabela de Luzon, la venta de un terreno baldío realengo denunciado por D. Pio Batarao, enclavado en el sitio denominado Cambalagan, jurisdicción del pueblo de Cabagan de dicha provincia, bajo el tipo en progresión ascendente de 152 pesos, 01 3/8, y con estricta sujeción al pliego de condiciones publicado en la «Gaceta» de esta Capital, núm. 64, de fecha 5 de Marzo último.

La hora para la subasta de que se trata, se registrará por la que marque el reloj que existe en el Salon de actos públicos.

Manila, 15 de Julio de 1890.—Abraham G.ª García. 1

MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE MANILA. DIRECCION.

Se han extraviado, según manifiestan los interesados, los resguardos talonarios de empeños de alhajas en estos Establecimientos, que a continuación se expresan:

Números	Fechas.	Importe de los préstamos	Nombres.
18.000	13 Julio 89.	200 »	Roman de la Rama.
4.812	10 Febrero 90.	4 »	Felisa Cruz.
27.791	28 Octubre 89.	6 »	Mamerto Perez.
26.639	16 Idem »	18 »	Leon Corpus.
21.605	19 Julio 90.	4 »	Simeona de la Leon.
14.209	10 Mayo »	2 »	Francisca Aguilar.
7.424	10 Marzo »	30 »	Margarita Ruiz.
13.618	6 Mayo »	2 »	Dom.ª Castronero.
7.536	10 Marzo »	20 »	Cayetano de Jesus.
21.028	12 Julio »	6 »	Gregorio Mariano.
14.757	10 Junio 89.	8 »	Lucina de la Cruz.

Los que se crean con derecho a dichos documentos se presentarán en esta oficina a deducirlos en el término de treinta días, contados desde la publicación del presente anuncio en la «Gaceta»: en la inteligencia que de no hacerlo en el referido plazo, se expedirán nuevos resguardos a favor de dichos interesados, en equivalencia de los primitivos talonarios, que quedarán desde luego sin ningún valor ni efecto.

Manila, 30 de Julio de 1890.—Manuel Ordoñez.

Providencias judiciales.

Don Antonio Pizarro Iñiguez, Juez de primera instancia de Quiapo de esta Capital.

Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado ausente Hermenegildo Olivares, indio, viudo, sin hijos de cincuenta y cuatro años de edad, de oficio jornalero, natural de Balabán, de la provincia de Union, vecino del pueblo de Pandacan, empadronado en la Cabecera núm. 21 de dicho pueblo, hijo de Cirapio y de Eusebia Valdez ya difuntos, con instrucción, para que por el término de 30 días, contados desde esta fecha, se presente en este Juzgado al objeto de anotarse su filiación y de notificarle un auto dictado en la causa núm. 5.92 que sigue contra el mismo por lesiones, pues de hacerlo así le oír y administrará justicia ó en caso contrario, se sustanciará la causa en su ausencia y rebeldía, parándole los perjuicios que en derecho hubiere lugar.

Dado en el Juzgado de Quiapo, 4 de Agosto de 1890.—Antonio Pizarro Iñiguez.—Por mandado de su Sria., Eustaquio Mendoza.

Don Ricardo Ricafort y Sanchez Juez de primera instancia en propiedad de este Juzgado del distrito de Tondo.

Por el presente cito, llamo y emplazo a los procesados ausentes chinos Lim Teoco, Lim Chonco, Go Changco, Lim Tad, Cue Sim, Ong Quiaoco, Co Chanco, Lim Gio, Tan Tongco, Go Chiongco, Co Tongco, Que Tongco, Tan Oco, Lim Cocco, Can Cocco, Chun Yoc, Ong Changco, Can Cocco, Go Quenico, Jo Chung, Quim Paoco, Jao Chi, Cao Chito, Chua Jaco, Yao Quiaoco y Tan Chio, para que dentro del término de 30 días, contados desde esta fecha, se presenten en este Juzgado, a fin de ampliar sus indagatorias en la causa núm. 2685 que instruyo contra los mismos y otros por juego prohibido pues de hacerlo así les oír y administrará justicia y en caso contrario, sustanciaré dicha causa en su ausencia rebeldía.

Dado en el Juzgado de Tondo a 4 de Agosto de 1890.—Ricardo Ricafort.—Por mandado de su Sria., Gonzalo Reyes.

Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado ausente Isaac de la Cruz, indio, soltero, natural de Guiguinto en Bulacan, vecino de Tondo, de 40 años de edad, de oficio cargador no sabe leer ni escribir, para que dentro del término de 30 días, contados desde esta fecha, se presente en este Juzgado, a fin de ampliar su indagatoria en la causa núm. 2655 que instruyo por hurto, pues de hacerlo así le oír y administrará justicia y en caso contrario, sustanciaré dicha causa en su ausencia rebeldía.

Dado en el Juzgado de Tondo a 4 de Agosto de 1890.—Ricardo Ricafort.—Por mandado de su Sria., Gonzalo Reyes.

En virtud de la providencia del Sr. D. Ricardo Ricafort, Juez de primera instancia del distrito de Tondo de esta Capital, dictada en la causa núm. 2661 sobre homicidio frustrado, se cito, llamo y emplazo al procesado ausente Daniel Medina, conocido por Daniel Dison, natural del arrabal de Sampaloc, de 14 años de edad, soltero, hijo de Saturnino y Verónica, sirviente que ha sido en el arrabal de Tondo, casa de Eulalio García, y cuyo actual paradero ignora, para que en el término de 30 días, comparezca en este Juzgado a evacuar el traslado que se le ha conferido la expresada causa, rombrando Procurador de Abogado que le defienda, apercibido que si no compareciere será declarado rebelde, parándole el perjuicio que hubiere lugar.

Manila, 19 de Julio de 1890.—Antonio Bustillo.—V.º B.º Ricafort.

Don Camilo Enrique Lobit, Juez de primera instancia del distrito de Binondo.

Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado ausente Cecilio Francisco, vecino del pueblo de Téresa, de color moreno, con cicatrices de viruelas en la cara, de estatura regular, nariz y boca regulares y cortado el pelo de romántico, para que por el término de 30 días, contados desde la publicación de este edicto en la «Gaceta oficial», se presente en este Juzgado ó en las cárceles de esta provincia, para responder a los cargos que contra el mismo resultan de la causa núm. 7070 que instruyo por robo, pues que de hacerlo le administrará justicia y en caso contrario, sustanciaré dicha causa en su ausencia y rebeldía, parándole los perjuicios que en derecho hubiere lugar.

Dado en el Juzgado de Binondo, 26 de Julio de 1890.—Camilo Enrique Lobit.—Por mandado de su Sria., Rafael G. Llanos.

Don Miguel Tojar y Castillo, Juez de primera instancia de esta provincia, que actúa con el presente Escribano que da fé.

Por el presente cito, llamo y emplazo al ausente Andrés Labrador, natural y vecino del pueblo de Dalaguete de esta provincia, casado, labrador, de 30 años de edad, de estatura regular, color moreno, cara ovalada, pelo, cejas y ojos negros, nariz chata, barba ninguna, boca regular, para que en el término de 30 días, a contar desde la publicación de este edicto, en la «Gaceta de Manila», se presente en este Juzgado a contestar los cargos que le resultan en la causa número 5401, que contra el mismo y otros, se sigue por lesiones, en la inteligencia que de hacerlo le oír y administrará justicia pues de lo contrario seguirá sustanciando la causa en su ausencia y rebeldía, parándole los perjuicios que en derecho hubiere lugar.

Dado en Cebú a 15 de Julio de 1890.—Miguel Tojar.—Por mandado de su Sria., Vicente Franco.

Por el presente cito, llamo y emplazo al ausente Rufino Mendoza, para que en el término de 30 días, a contar desde la publicación de este edicto, en la «Gaceta de Manila», se presente en este Juzgado ó en la cárcel pública de esta Ciudad a contestar los cargos que le resultan en la causa número 5480 que contra el mismo y otros se sigue por hurto, en la inteligencia que de hacerlo así le oír y administrará justicia pues de lo contrario seguirá sustanciando la causa en su ausencia y rebeldía, parándole los perjuicios que en derecho hubiere lugar.

Dado en Cebú, 18 de Julio de 1890.—Miguel Tojar.—Por mandado de su Sria., Vicente Franco.

Por el presente cito, llamo y emplazo a Marcelo Concepcion, indio, soltero, de 23 a 24 años de edad, natural y vecino de esta Ciudad, de oficio escribiente, de estatura alta, cari-largo, cuerpo delgado color y boca regulares, nariz alta, pelo, cejas y ojos negros, siendo la última vecindad de dicho Marcelo el sitio de Pangpang de esta Ciudad, para que en el término de 30 días, contados desde esta fecha, comparezca en este Juzgado ó en la cárcel pública de esta Ciudad a recibir notificación y oír sentencia recaída en la causa núm. 1338 seguida contra él por estafa, en la inteligencia que de hacerlo se le administrará justicia y se admitirán sus recursos, y de lo contrario se seguirá dicha causa en su ausencia y rebeldía, parándole los perjuicios consiguientes.

Dado en Cebú, 19 de Julio de 1890.—Miguel Tojar.—Por mandado de su Sria., Vicente Franco.

Don Abdon Vicente Gonzalez, Juez de primera instancia de esta provincia, en propiedad, que de serlo y estar en actual ejercicio de sus funciones, yo el presente actuario doy fé.

Por el presente llamo, cito y emplazo por pregon y edicto al ausente nombrado Andong, natural de Bauan y vecino de San Juan y aparcerero de D. Canuto Magtibay, a

fin dentro del término de 30 días, comparezca en el Juzgado ó en la cárcel pública de esta provincia a contestar los cargos que le resultan en la causa núm. 1338 seguida contra él por estafa, en la inteligencia que de hacerlo se le administrará justicia y se admitirán sus recursos, y de lo contrario se seguirá dicha causa en su ausencia y rebeldía, parándole los perjuicios consiguientes.

Dado en Batangas a 29 de Julio de 1890.—Abdon Gonzalez.—Por mandado de su Sria., Isidoro Amurao.

Don José Losada y Losada, Juez de primera instancia en propiedad de esta provincia de Mindoro.

Por el presente cito, llamo y emplazo a D. Pedro indio, de unos años de edad, viudo, natural de la provincia de Batangas, y vecino de Lubbán de esta parte querellante en la causa núm. 929, seguida contra Juan Alveira y otro por exacciones, amenazas y para que dentro del término de 15 días, contados desde la publicación del presente en la «Gaceta oficial», comparezca en este Juzgado por sí ó por Procurador a ejercitar o apercibido de quedar desistido desde luego en caso parándole los perjuicios consiguientes.

Dado en Calapan a 22 de Julio de 1890.—José Losada.—Por mandado de su Sria.—Pedro L. L. Gonzales.

Don José de Jesús Font, Juez de primera instancia en propiedad de esta provincia de Mindoro.

Por el presente cito, llamo y emplazo a D. Pedro indio, de unos años de edad, viudo, natural de la provincia de Batangas, y vecino de Lubbán de esta parte querellante en la causa núm. 929, seguida contra Juan Alveira y otro por exacciones, amenazas y para que dentro del término de 15 días, contados desde la publicación del presente en la «Gaceta oficial», comparezca en este Juzgado por sí ó por Procurador a ejercitar o apercibido de quedar desistido desde luego en caso parándole los perjuicios consiguientes.

Dado en Calapan a 22 de Julio de 1890.—José Font.—Por mandado de su Sria.—Pedro L. L. Gonzales.

Don Francisco Fernandez, Juez de Paz propietario de la Cabecera de la provincia del mismo nombre, en primera instancia interino por sustitución reglamentaria, en el pleno de sus funciones, el infrascripto da fé.

Por el presente cito, llamo y emplazo por el término de 30 días, a contar desde el en que el presente edicto en la «Gaceta oficial de Manila», a Jacinto Labayog, veintidos años de edad, natural de Paniqui de esta provincia y empadronado en la Cabecera núm. 12 cargo de D. Remigio F. Latorre, de estatura regular, color moreno, nariz regular, ojos pardos, cari larga, pelo y cejas negros, con varios lunares en la cara, de oficio labrador, reo ausente en la causa núm. 3522 que contra el mismo me halla instruyendo por el delito de robo, para que dentro del expresado término, se presente en este Juzgado ó en la cárcel pública de esta provincia para contestar los cargos de dicha causa le resultan en la inteligencia que de hacerlo le oír y administrará justicia y en caso contrario, le declarará contumaz y rebelde y se enterará respecto a las ulteriores diligencias de sustanciar los estrados del Juzgado.

Dado en el Juzgado de primera instancia de Tondo a 19 de Julio de 1890.—Francisco Fernandez.—Por mandado de su Sria., Adriano Dancél.

Don Indalecio Villaverde y Lagos, Juez de primera instancia en propiedad de la provincia, que de estar en pleno ejercicio de sus funciones, el infrascripto Escribano da fé.

Por el presente cito, llamo y emplazo a los ausentes Bulajan, Francisco Bulajan, Cesario Albino, Eduardo los nombres Bartolomé, hermano de Calico y los tres primeros vecino del barrio de S. Cristóbal de los gundons de Sto. Niño, y los dos últimos de Sta. Catalina, todos de S. Pablo de la provincia de la Laguna, para que en el término de 30 días, contados desde la publicación de este edicto se presenten en este Juzgado a responder a los cargos que contra ellos resultan en la causa núm. 3522 que instruyo por robo en cuadrilla con detención ilegal, pues de hacerlo le oír en justicia y de lo contrario se enterará la causa en su ausencia y rebeldía se entenderá las diligencias referentes a los mismos con los Estrados de la causa.

Dado en Tayabas a 31 de Julio de 1890.—Indalecio Villaverde.—Por mandado de su Sria., Gregorio Abas.

Por providencia del Sr. Juez de primera instancia de esta provincia, recaída en las diligencias que se instruyeron en este Juzgado contra Celedonio García por hurto, se cito, llamo y emplazo a Simona García, vecina de Taon, para que en el término de 9 días, contados desde esta fecha, comparezca en este Juzgado para prestar declaración como testigo en las diligencias.

Tayabas y Escribanía de mi cargo, 30 de Julio de 1890.—Gregorio Abas.

Por providencia del Sr. Juez de primera instancia de esta provincia, recaída en esta fecha, en la causa número 5480 seguida contra el mismo y otros por lesiones, se cito, llamo y emplazo a los testigos ausentes Novalesa y nombrados Máximo y Calixta, todos de Calabuan, para que por el término de 9 días, a contar desde la publicación de este edicto, se presenten en este Juzgado a prestar sus declaraciones en la expresada causa, apercibido que de no hacerlo, se les pararán los perjuicios que en derecho haya lugar.

Santa Cruz, 1.º de Agosto de 1890.—Higino Benito.

Anuncio.

MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Compilación legislativa del Gobierno y Administración de Ultramar.—Publicado el tomo 5.º de la obra, que comprende el primer trimestre de 1887, se halla de venta en la Halla del Ministerio de Ultramar, a los precios siguientes:

Península 8 pesetas.
Provincias de Ultramar 3 pesos fuertes.
A los libreros y demás personas que en la Península como de Ultramar, los que excedan de 9 y 14 ejemplares, respectivamente, se les hacen considerables rebajas en los términos que establecen las bases de publicación, que se remitirán a los interesados por carta dirigida al Habilitado en el Ministerio.

IMP. DE RAMIREZ Y COMP.—MAGALLANES.